



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

33^a REUNION – 8^a SESION ORDINARIA
16 DE MAYO DE 2001

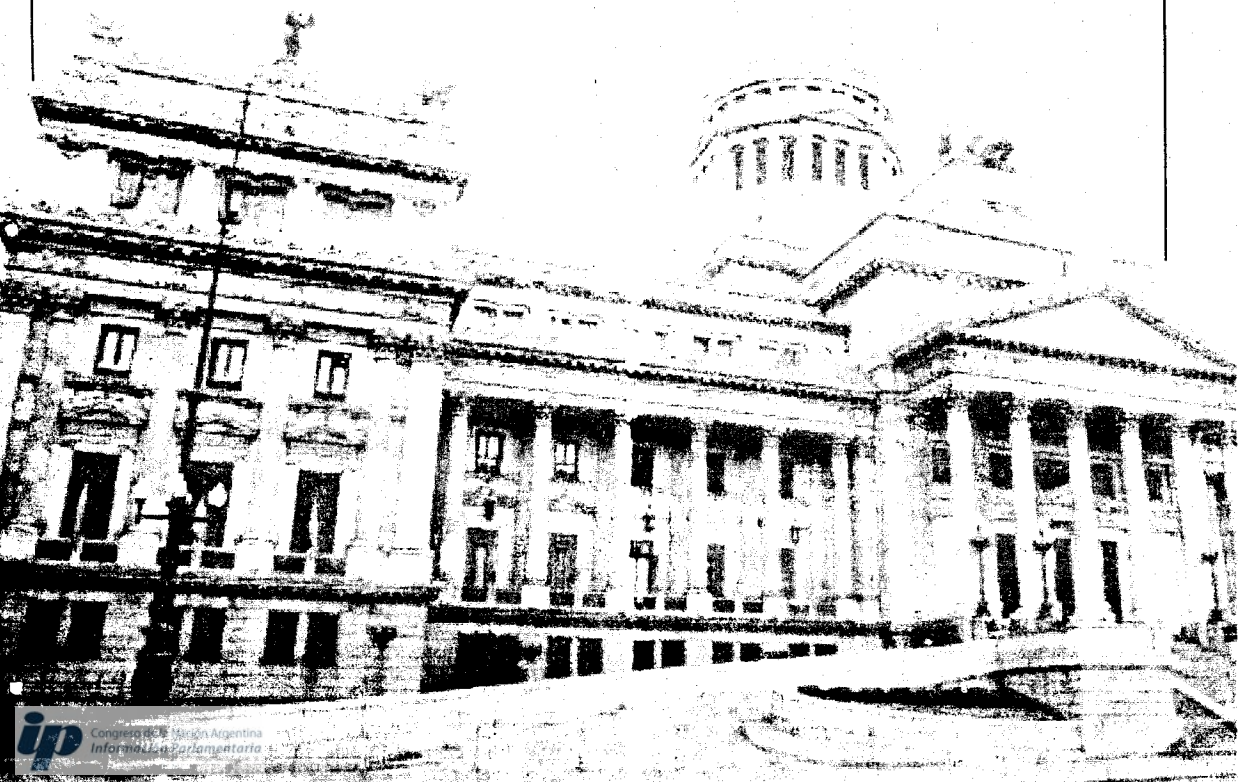
Presidencia del señor vicepresidente del Honorable Senado, doctor **EDUARDO MENEM**, del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, don **FELIPE R. SAPAG**, y del presidente de la Comisión de Legislación General del Honorable Senado, doctor **RICARDO A. BRANDA**

Secretarios:

Señor **JUAN C. OYARZUN**, señor **JOSE D. CANATA** y señor **MIGUEL J. MAMY**

Prosecretarios:

Señor **JUAN J. CANALS**, doctor **MIGUELA. FERNANDEZ ALIAS** y señor **RODOLFO BERNARDINI**



PRESENTES:

AGÜNDEZ, Jorge A.
 ALASINO, Augusto
 ALTUNA, Juan C.
 ANGELOZ, Eduardo C.
 ARNOLD, Eduardo A.
 BAUZÁ, Eduardo
 BRANDA, Ricardo A.
 CABANA, Fernando V.
 CAFIERO, Antonio F.
 CARBONELL, José F.
 CORACH, Carlos Vladimiro
 DEL PIERO, Pedro
 FUNES, Carlos D.
 GALVÁN, Raúl A.
 GARCÍA ARECHA, José M.
 GIOJA, José L.
 HUMADA, Julio C.
 LÓPEZ, Alcides H.
 MAGLIETTI, Alberto R.
 MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique J. M.
 MARTINEZ PELÁEZ, Nélida Susana
 MASSAT, Jorge
 MAYA, Héctor M.
 MENEM, Eduardo
 MIKKELSEN-LÖTH, Jorge F.
 MOLINARI ROMERO, Luis A. R.
 MOREAU, Leopoldo R. G.
 NEGRE de ALONSO, Liliana Teresita
 ORTEGA, Ramón B.
 PALACIOS, Gerardo L.
 PARDO, Ángel F.
 PRETO, Ruggero
 RAIJER, Beatriz I.
 RODRÍGUEZ, Manuel A.
 ROMERO FERIS, José A.
 ROSTAN, Néstor D.
 SAGER, Hugo Abel

SALA, Osvaldo R.
 SALUM, Humberto E.
 SAN MILLÁN, Julio A.
 SAPAG, Felipe R.
 SAPAG, Silvia E.
 TELL, Alberto Máximo
 TORINO, Héctor Omar
 USANDIZAGA, Horacio Daniel
 VAQUIR, Omar M.
 VARIZAT, Daniel A.
 VERNA, Carlos Alberto
 VILLARROEL, Pedro G.
 VILLAYERDE, Jorge A.
 YOMA, Jorge R.
 ZALAZAR, Horacio Anibal

AUSENTES:

CANTARERO, Emilio Marcelo
 COSTANZO, Remo J.
 DE LA ROSA, Carlos L.
 GENOUD, José
 LEÓN, Luis A.
 LOZA, Juan Carlos
 MASSACCESI, Horacio
 MENEHINI, Javier R.
 PRUYAS, Tomás R.

AUSENTES CON AVISO:

BRAVO, Leopoldo
 ULLOA, Roberto Augusto

EN COMISIÓN:

BAUM, Daniel
 GAGLIARDI, Edgardo
 LOSADA, Mario A.
 OUDIN, Ernesto
 ROMERO, Marcelo J.
 SÁEZ, José María

SUMARIO

1. Manifestaciones en minoría. (Pág. 1906.)
2. Izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 1906.)
3. Homenaje al artista plástico Osvaldo Gasparini. Se considera el dictamen de las comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución del señor senador Villaverde (S.-2.629/00). Se aprueba. (Pág. 1906.)
4. Homenaje a la memoria del coronel Juan Pascual Pringles. Se considera el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso y del señor senador Torino (S.-546/01). Se aprueba. (Pág. 1908.)
5. Asuntos Entrados:

I. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la pro-

moción a la categoría "A", embajador extraordinario y plenipotenciario del funcionario Enrique Julio de la Torre (P.E.-49/01). (Pág. 1911.)

II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la promoción a la categoría "A", embajador extraordinario y plenipotenciario, del funcionario Gerónimo Cortés Funes (P.E.-50/01). (Pág. 1911.)

III. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la promoción a la categoría "A", embajador extraordinario y plenipotenciario, de la funcionaria Ileana Di Giovan Battista (P.E.-51/01). (Pág. 1911.)

IV. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la promoción a la categoría "A", emba-

ción remite **resolución** respecto del **Programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes** (O.V.-575/99). Se aprueba. (Pág. 2074.)

57. **Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en el expediente Oficiales Varios** por el cual la **Auditoría General de la Nación** remite **resolución** sobre el servicio de la deuda de letras externas de la **República Argentina** en pesos 8,75 % (O.V.-421/99). Se aprueba. (Pág. 2075.)
58. **Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en el expediente Oficiales Varios** por el cual la **Auditoría General de la Nación** remite **resolución** sobre **evaluación de metas físicas en el ámbito de Gendarmería Nacional**. (O.V.-71/99). Se aprueba. (Pág. 2076.)
59. **Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en el expediente Oficiales Varios** por el cual la **Auditoría General de la Nación** remite **resolución** sobre **relevamiento del sistema administrativo contable que soporta la ejecución presupuestaria del programa 33 -acciones compensatorias en Educación-**, así como también la **evaluación de la consistencia de la información producida en materia de ejecución de metas físicas en el ámbito del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación**. (O.V.-56/99). Se aprueba. (Pág. 2079.)
60. **Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en los expedientes Oficiales Varios** mediante los que la **Auditoría General de la Nación** remite **resoluciones** en el ámbito de la **Administración de Parques Nacionales** sobre **relevamiento del servicio jurídico y sobre evaluación de la gestión de compras** (O.V.-386/99). Se aprueba. (Pág. 2080.)
61. **Consideración del dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología en tres proyectos de declaración: de los señores senadores León, Oudin y Maglietti, sobre el desarrollo en el Centro Atómico Bariloche de un nuevo sistema de enriquecimiento de uranio**. (S.-55, 64 y 175/01). Se aprueba. (Pág. 2082.)
62. **Consideración del dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Sager** por el que se declara de interés nacional y parlamentario el **III Instituto de Física Molecular del Mercosur** (S.-163/01). Se aprueba. (Pág. 2085.)
63. **Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de declaración del señor senador Molinari Romero** por el que se manifiesta **preocupación ante la problemática educativa** (S.-36/01). Se aprueba. (Pág. 2087.)
64. **Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de declaración del señor senador Genoud** por el que se manifiesta **beneplácito por el desempeño de Alejandro Bianchi, quien obtuviera medalla de bronce en la Olimpiada Internacional Rioplatense de Matemática** (S.-2.654/00). Se aprueba. (Página 2087.)
65. **Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de resolución del señor senador Sala** por el que se **declara de interés nacional el Programa de Prevención de Violencia Escolar instrumentado en Puerto Madryn, Chubut** (S.-2.740/00). Se aprueba. (Pág. 2088.)
66. **Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de resolución del señor senador Usandizaga** por el que se **declara de interés parlamentario el VI Encuentro Nacional de Consejos de Administración de Cooperativas Escolares a realizarse en San Javier, Santa Fe** (S.-2/01). Se aprueba. (Pág. 2089.)
67. **Consideración del dictamen de la Comisión de Deportes en el proyecto de ley del señor senador Palacios y otros señores senadores** por el que se **establece que las indumentarias deportivas de las representaciones nacionales luzcan el contorno impreso de las islas Malvinas** (S.-1.054/00). Se aprueba. (Pág. 2090.)
68. **Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley del señor senador Cabana** por el que se **declara monumento histórico nacional a la casa del Marqués de Yavi, en Jujuy** (S.-2.331/00). Se aprueba. (Pág. 2092.)
69. **Consideración del dictamen de las comisiones de Familia y Minoridad y de Agricultura y Ganadería en el proyecto de ley en revisión** por el que se **conmemora el 15 de octubre como Día de la Mujer Rural** (C.D.-87/00). Se aprueba. (Pág. 2093.)
70. **Consideración de diversas iniciativas referidas a la Reforma Política**. Se pasa a cuarto intermedio. (Pág. 2094.)
71. **Apéndice:**

I. Sanciones del Honorable Senado.
(Pág. 2133.)

II. Inserciones. (Pág. 2136.)

Sala de las comisiones, 7 de marzo de 2001.

*Fernando V. Cabana. – Horacio Massaccesi.
– Jorge A. Agúndez. – Manuel A. Rodríguez.
– Hugo A. Sager. – Javier R. Meneghini.
– Jorge A. Villaverde. – Carlos A. Verna. –
Gerardo L. Palacios. – José A. Romero Feris.
– Roberto A. Ulloa.*

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(7 de septiembre de 2000)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...

DÍA DE LA MUJER RURAL

Artículo 1° – Conmemorar el día 15 de octubre de cada año como Día de la Mujer Rural.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

RAFAEL M. PASCUAL.
Guillermo R. Aramburu.

ACLARACION

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por la diputada D'Errico.

Sr. Presidente (Menem). – En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Cabana. – Señor presidente: me siento obligado a no insertar mi discurso, sino a leerlo, porque es interesante lo que voy a decir.

Desde hace mucho tiempo las organizaciones internacionales cuyo objeto es la preservación y el reconocimiento de los derechos de la mujer vienen proponiendo la designación de una fecha para conmemorar el Día de la Mujer Rural y reivindicar su figura.

Se ha pensado que ese día debe ser el 15 de octubre de cada año, fecha que sería la indicada –en todo el mundo– para la conmemoración de lo que aquí se trata.

El proyecto de ley que hoy se somete a la consideración del Honorable Senado –proyecto que ya fue aprobado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, correspondiéndole al Senado actuar como Cámara revisora– no hace sino receptar esta iniciativa y propone que sea esa fecha, el 15 de octubre, la que quede incorporada a nuestro calendario como el día

en que la ciudadanía deberá conmemorar o recordar a la mujer rural.

No voy a continuar, voy a pedir que se inserte el resto del discurso, porque creo que el tiempo apremia y no vamos a tener quórum.

Sr. Presidente (Menem). – En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes

En consideración el pedido de inserción formulado por el señor senador por Jujuy.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). – Se procederá en consecuencia.¹

70

REFORMA POLITICA

Sr. Presidente (Menem). – A continuación, pasamos a la consideración de las preferencias votadas con anterioridad, con dictamen de comisión o sin él, sobre diversas iniciativas referidas a la reforma política.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Oyarzún). – (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado el expediente P.E.-390/00, "Poder Ejecutivo: mensaje 970/00 y proyecto de ley sobre un nuevo Código Nacional Electoral" y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1° – Modifícase el artículo 5° de la ley 23.298, el que quedará redactado al siguiente tenor:

Artículo 5°: Esta ley es de orden público y se aplicará a los partidos que intervengan en la elección de autoridades nacionales.

¹ Ver el Apéndice.

Art. 2° – Incorpóranse como tercer y cuarto párrafos del artículo 10 de la ley 23.298 los siguientes textos:

Al solicitar su reconocimiento, las alianzas deberán presentar un acuerdo suscrito por los partidos que la integran, en el que se establezca la forma en que se distribuirán, entre ellos, los aportes públicos para el financiamiento de los partidos y de las campañas. La falta de presentación del acuerdo implicará el rechazo de la solicitud de reconocimiento

El juez federal con competencia electoral interviniente registrará el acuerdo y remitirá copia certificada del mismo al Ministerio del Interior.

Art. 3° – Modificase el artículo 29 de la ley 23.298, el que quedará redactado al siguiente tenor:

Artículo 29: Las elecciones para elegir autoridades partidarias y para elegir candidatos a cargos electivos, salvo para el cargo de presidente de la Nación, se regirán por la carta orgánica, subsidiariamente por esta ley, y en lo que resulte aplicable, por la legislación electoral. Las elecciones para elegir candidatos a presidente se regirán por lo dispuesto por esta ley y subsidiariamente por la legislación electoral.

Artículo 4° – Incorpórase como artículo 29 bis de la ley 23.298 el siguiente:

Artículo 29 bis: La elección de los candidatos a presidente se realizará a través de internas abiertas. La fecha de la elección deberá ser comunicada al juzgado federal con competencia electoral de cada distrito.

La campaña electoral para la elección interna abierta podrá iniciarse treinta (30) días antes y deberá finalizar cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha fijada para la elección

La emisión en medios televisivos, de espacios de publicidad destinados a captar el sufragio se limitará a los diez (10) días previos a la fecha fijada para la elección.

El juzgado federal con competencia electoral de cada distrito confeccionará y entregará a los partidos políticos o alianzas el padrón que se utilizará en esta elección el que incluirá, para cada caso, a los afiliados del partido o de los partidos miembros de la alianza y a los ciudadanos que no tengan afiliación partidaria.

El voto será secreto y no obligatorio. Los ciudadanos podrán votar en la elección del candidato a presidente de sólo un partido o alianza. La emisión del voto se registrará en el documento cívico utilizado, mediante la utilización de un sello uniforme cuyo modelo será determinado por la Cámara Nacional Electoral.

Será proclamado candidato a presidente, el precandidato que haya obtenido la mayoría simple de votos válidos emitidos.

Art. 5° – Derógase el inciso c) del artículo 50 de la ley 23.298.

Art. 6° – Los partidos políticos deberán adecuar su carta orgánica a las disposiciones de esta ley, en el plazo de noventa (90) días a partir de la entrada en vigencia de la presente.

Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerando el expediente P.E.-392/00, “Poder Ejecutivo: mensaje 972/00 y proyecto de ley, sobre organización del Ministerio Público Federal en lo electoral” y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – Créase un (1) cargo de fiscal general de segunda instancia para actuar ante la Cámara Nacional Electoral y un (1) cargo de secretario de fiscalía general.

Art. 2° – El actual fiscal titular ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal con competencia electoral de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional Electoral, podrá optar, dentro de los 30 días de promulgada la presente ley, por el mantenimiento en el ejercicio de sus funciones de competencia en lo criminal y correccional federal, o por el desempeño del nuevo cargo creado en el artículo precedente con la competencia exclusiva en materia electoral.

Art. 3° – En ejercicio de la atribución establecida en el artículo 33 inciso g) de la ley 24.946, el procurador general de la Nación deberá afectar en forma permanente un (1) fiscal y un (1) fiscal auxiliar de la Procuración General de la Nación para que se desempeñen respectivamente, en forma conjunta al fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral y al fiscal ante el juzgado nacional con competencia electoral de la Capital Federal.

En estos casos no será de aplicación la limitación temporal prevista en el artículo 15 de la ley 24.946.

Art. 4° – Derógase el inciso d) del artículo 4° de la ley 19.108.

Art. 5° – Créase el Cuerpo de Asistencia Contable en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral, como órgano de consulta técnica no vinculante a disposición de todos los magistrados con competencia electoral del país.

El órgano se integrará con tres (3) ciudadanos argentinos que posean título de contador de validez nacional elegidos por concurso público.

La organización y funcionamiento del Cuerpo de Asistencia Contable se sujetará, con excepción de lo regulado en este artículo, a las disposiciones del decreto ley 1.285/58 y sus normas reglamentarias.

Art. 6º – Incorpórase como último párrafo del artículo 26 de la ley el siguiente texto:

Los magistrados del Ministerio Público Fiscal con competencia en materia electoral de todo el país, podrán requerir a los efectos del control del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales, la colaboración del Cuerpo de Asistencia Contable de la Cámara Nacional Electoral.

Art. 7º – La presente ley se implementará una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, el que se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio Público Fiscal de la Nación y al Poder Judicial de la Nación según corresponda.

Aquellos que se designen en los cargos creados, sólo tomarán posesión de éstos cuando se verifique la condición financiera descrita.

Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado el expediente P.E.-390/00, "Poder Ejecutivo: mensaje 970/00 y proyecto de ley sobre un nuevo Código Nacional Electoral" y el Orden del Día N° 549/99 y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

REFORMA AL CODIGO ELECTORAL NACIONAL

Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el que quedará redactado al siguiente tenor:

Artículo 14: *Funciones de los electores.* Todas las funciones que esta ley atribuye a las autoridades de mesa son irrenunciables y serán compensadas en la forma que determina esta ley y su reglamentación.

Art. 2º – Modifícase el primer párrafo del artículo 41 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto

ordenado por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el que quedará redactado al siguiente tenor:

Artículo 41: *Mesas electorales.* Cada circuito se dividirá en mesas las que se constituirán con hasta cuatrocientos cincuenta (450) electores inscritos, agrupados por sexo y orden alfabético.

Art. 3º – Incorpóranse como capítulo IV bis – "De la campaña electoral" – del título III del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, las siguientes normas:

CAPITULO IV BIS

De la campaña electoral

Artículo 64 bis: *Duración de la campaña electoral.* A los efectos de esta ley, se entenderá por campaña electoral el conjunto de actividades realizadas con el propósito de promover o desalentar expresamente la captación del sufragio a favor, o en contra, de candidatos oficializados a cargos públicos electivos nacionales.

Las actividades académicas, los debates, conferencias, presentación de planes y proyectos, y la realización de congresos y simposios no serán considerados como partes integrantes de la campaña electoral.

La campaña electoral para la elección de diputados y senadores nacionales sólo podrá iniciarse sesenta (60) días corridos antes de la fecha fijada para el comicio. Cuando se trate de la elección de presidente y vicepresidente, la campaña sólo podrá iniciarse noventa (90) días antes de la fecha fijada para el comicio.

Artículo 64 ter: *Publicidad en medios de comunicación.* Queda prohibida la emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la captación de sufragio para candidatos a cargos públicos electivos nacionales antes de los treinta y dos (32) días previos a la fecha fijada para el comicio.

Artículo 64 quáter: *Publicidad de los actos de gobierno.* Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales.

Queda prohibido durante los siete (7) días anteriores a la fecha fijada para la celebración del comicio, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo, y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales.

Art. 4º – Modifícase el título y los incisos *f)* y *h)* del artículo 71 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, los que quedarán redactados al siguiente tenor:

Artículo 71: *Prohibiciones*. Queda prohibido:

- f)* Realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde cuarenta y ocho horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo.
- h)* Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre.

Art. 5º – Modifícase el artículo 72 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el que quedará redactado al siguiente tenor:

Artículo 72: *Autoridades de la mesa*. Cada mesa electoral tendrá como única autoridad un funcionario que actuará con el título de presidente. Se designará también un suplente, que auxiliará al presidente y lo reemplazará en los casos que esta ley determina.

En caso de tratarse de la elección de presidente y vicepresidente de la Nación, las autoridades de mesa designadas para la primera vuelta cumplirán también esa función en caso de llevarse a cabo la segunda vuelta.

Los ciudadanos que hayan cumplido funciones como autoridades de mesa recibirán una compensación consistente en:

- a)* Un franco compensatorio, para el caso de los funcionarios y empleados públicos nacionales;
- b)* Una suma fija en concepto de viático, para el caso de los que no sean ni funcionarios ni empleados públicos nacionales.

Sesenta (60) días antes de la fecha fijada para el comicio, el Ministerio del Interior determinará la suma que se liquidará en concepto del viático establecido en el inciso *b)* de este artículo. La resolución será comunicada de inmediato al juez federal con competencia electoral de cada distrito.

El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones, el plazo y la forma en que se harán efectivas las compensaciones que establece este artículo.

Art. 6º – Modifícase el artículo 76 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el que quedará redactado al siguiente tenor:

Artículo 76: *Obligaciones de las autoridades de mesa*. El presidente de la mesa y el su-

plente deberán estar presentes en el momento de la apertura y clausura del acto electoral, siendo su misión especial velar por el correcto y normal desarrollo del mismo. Al reemplazarse entre sí, los funcionarios dejarán constancia escrita de la hora en que toman y dejan el cargo.

Art. 7º – Modifícase el título e incorpórase como último párrafo del artículo 105 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el siguiente texto:

Artículo 105: *Comunicaciones*.

.....

El presidente remitirá una copia del telegrama a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior.

Art. 8º – Modifícase el artículo 128 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el que quedará redactado:

Artículo 128: *Portación de armas. Exhibición de banderas, divisas o distintivos partidarios*. Se impondrá prisión de hasta quince días o multa de hasta quinientos pesos (\$ 500) a toda persona que violare la prohibición impuesta por el artículo 71 inciso *e)*, de la presente ley.

Art. 9º – Incorpórase como artículo 128 bis del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el siguiente texto:

Artículo 128 bis: *Actos de proselitismo. Publicación de encuestas y proyecciones*. Se impondrá multa de entre diez mil (\$ 10.000) y cien mil pesos (\$ 100.000) a toda persona física o jurídica que violare las prohibiciones impuestas por el artículo 71 en sus incisos *f)* y *h)* de la presente ley.

Art. 10. – Incorpórase como artículo 128 ter del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el siguiente texto:

Artículo 128 ter: *Publicidad en medios de comunicación*.

- a)* El partido político que incumpliera los límites de emisión y publicación de avisos publicitarios en televisión, radio y medios gráficos, perderá el derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años y los fondos para el financiamiento de campaña por una (1) a dos (2) elecciones;
- b)* La persona física o jurídica que incumpliera los límites de emisión y publica-

ción de avisos publicitarios en televisión, radio y medios gráficos será pasible de una multa de entre diez mil (\$ 10.000) y cien mil pesos (\$ 100.000);

c) La persona física o jurídica que explote un medio de comunicación y que violare la prohibición establecida en el artículo 64 ter de la presente ley será pasible de la siguiente sanción:

1. Multa equivalente al valor total de los segundos de publicidad de uno (1) hasta cuatro (4) días, conforme a la facturación de dicho medio en el mes anterior a aquel en que se produzca la infracción, si se trata de un medio televisivo o radial.
2. Multa equivalente al valor total de los centímetros de publicidad de uno (1) hasta cuatro (4) días, conforme a la facturación de dicho medio en el mes anterior a aquel en que se produzca la infracción, si se trata de un medio gráfico.

Art. 11. – Incorpórase como artículo 133 bis del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el siguiente texto:

Artículo 133 bis: *Publicidad de actos de gobierno.* Los funcionarios públicos que autorizaren o consintieran la publicidad de actos de gobierno en violación de la prohibición establecida en el artículo 64 quáter, incurrirán en el delito previsto en el artículo 248 del Código Penal de la Nación.

Artículo 12. – Todas aquellas normas del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, que se refieran a los dos suplentes del presidente de mesa deberán entenderse como referidas al suplente del presidente de mesa.

Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De conformidad con las disposiciones pertinentes del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda han considerado los expedientes P.E.-391/00, "Poder Ejecutivo: mensaje 971/00 y proyecto de ley modificando la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (ley 23.298)", S.-372/00, "Corach: proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos políticos", S.-404/00, "Meneghini: reproduce el proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales, ref. S.-68/98", S.-656/00, "Alasino: pro-

yecto de ley de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales", S.-675/00, "Moreau: proyecto de ley sobre financiamiento de partidos políticos", S.-728/00, "Galván: proyecto de ley sobre financiamiento de partidos políticos", S.-869/00, "Romero Feris: proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales", S.-18/01, "Molinari Romero: proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos políticos" y S.-42/01, "García Arecha: proyecto de ley sobre control de los aportes financieros de origen privado a los partidos políticos" y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY DE FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLITICOS

TITULO I

CAPÍTULO I

Del patrimonio de los partidos políticos

Artículo 1º – El patrimonio del partido político se integrará con los bienes y recursos que autoricen la presente ley y la respectiva carta orgánica.

Art. 2º – Los fondos del partido político, salvo los destinados a financiar la campaña electoral, deberán depositarse en una única cuenta por distrito que se abrirá en el Banco de la Nación Argentina, a nombre del partido y a la orden conjunta del presidente y tesorero del partido.

Los órganos nacionales del partido deberán abrir una cuenta única en el distrito de su fundación en el Banco de la Nación Argentina, a nombre del partido y a la orden conjunta del presidente y tesorero del partido.

Las cuentas deberán registrarse en el juzgado federal con competencia electoral de cada distrito correspondiente, en la Auditoría General de la Nación y ante la Cámara Nacional Electoral.

Art. 3º – Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años, los partidos políticos que recibieran o depositaran fondos en cuentas distintas de las previstas en el artículo anterior.

Art. 4º – El presidente y tesorero del partido que autoricen o consintieran la utilización de cuentas distintas de las establecidas en esta ley para el financiamiento de la actividad del partido político serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios.

Art. 5° – Los bienes registrables que se adquieran con fondos del partido o que provinieran de contribuciones o donaciones deberán inscribirse a nombre del partido en el registro respectivo.

Art. 6° – Los bienes y actividades de los partidos reconocidos estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución nacional. Esta exención alcanzará a los bienes inmuebles locados o cedidos en usufructo o comodato a los partidos siempre que se encuentren destinados en forma exclusiva y habitual a las actividades específicas del partido y que las contribuciones estén a cargo del partido.

Quedan comprendidos en la exención los bienes de renta del partido con la condición de que aquella se invierta, exclusivamente, en la actividad partidaria y no acrecentare directa o indirectamente el patrimonio de persona alguna y el papel destinado al uso exclusivo del partido.

Art. 7° – Al iniciarse la campaña electoral, los partidos políticos y alianzas que presenten candidaturas a cargos públicos electivos nacionales deberán designar un responsable económico-financiero y un responsable político de campaña por distrito quienes serán solidariamente responsables con el presidente y el tesorero del o los partidos por el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con competencia electoral correspondiente, a la Cámara Nacional Electoral y a la Auditoría General de la Nación.

Art. 8° – Los fondos destinados a financiar la campaña electoral deberán depositarse en una cuenta única por distrito que se abrirá en el Banco de la Nación Argentina, a nombre del partido o alianza y a la orden conjunta del responsable económico-financiero y del responsable político de campaña.

Los órganos nacionales del partido deberán abrir una cuenta única para la campaña electoral en el distrito de su fundación en el Banco de la Nación Argentina, a nombre del partido o alianza y a la orden conjunta del responsable económico-financiero y del responsable político de campaña.

Las cuentas deberán registrarse en el juzgado federal con competencia electoral de cada distrito correspondiente, en la Auditoría General de la Nación y ante la Cámara Nacional Electoral y deberán ser cerradas a los treinta (30) días de finalizada la elección.

Art. 9° – Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público de las campañas electorales por una (1) o dos (2) elecciones, los partidos políticos que recibieran o depositaran fondos en cuentas distintas de las previstas en el artículo anterior.

Art. 10. – El presidente y tesorero del partido y los responsables de la campaña electoral que autoricen o consientan la utilización de cuentas distintas de las establecidas en esta ley para el financiamiento de la campaña electoral serán pasibles de

inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios.

CAPÍTULO II

Fondo Partidario Permanente

Art. 11. – El Estado nacional garantizará el normal funcionamiento de los partidos políticos reconocidos mediante aportes destinados a las siguientes actividades:

- a) Desarrollo institucional y capacitación y formación política;
- b) Campañas electorales generales.

Por desarrollo institucional se entiende todo lo relacionado con el funcionamiento político y administrativo de los partidos.

Art. 12. – El Fondo Partidario Permanente será administrado por el Ministerio del Interior y estará constituido por:

- a) El aporte que destine anualmente la Ley de Presupuesto General de la Nación;
- b) El dinero proveniente de las multas que se recauden por aplicación de esta ley;
- c) El producto de las liquidaciones de bienes que pertenecieran a los partidos políticos extinguidos;
- d) Los legados y donaciones que se efectúen con ese destino al Estado nacional;
- e) Los reintegros que efectúen los partidos, confederaciones y alianzas;
- f) Los aportes privados destinados a este fondo;
- g) Los fondos remanentes de los asignados por esta ley o por la Ley de Presupuesto General de la Nación, al Ministerio del Interior, una vez realizadas las erogaciones para las que fueron previstos.

Art. 13. – El Ministerio del Interior recibirá el veinte por ciento (20 %) de la partida presupuestaria asignada al Fondo Partidario Permanente en la Ley de Presupuesto General de la Nación, previo a toda otra deducción, con el objeto de:

- a) Otorgar las franquicias que autoriza la presente ley;
- b) Asignar el aporte para el desarrollo institucional de aquellos partidos políticos reconocidos con posterioridad a la distribución anual del Fondo Partidario Permanente;
- c) Establecer el sistema de adelantos contra avalos o contra cauteles, en los casos de alianzas o partidos que no registren referencia electoral anterior.

Los fondos remanentes se integrarán al Fondo Partidario Permanente.

Art. 14. – En el primer mes de cada año el Ministerio del Interior informará a los partidos el monto de los recursos que integran el Fondo Partidario Permanente al 31 de diciembre del año anterior. Ese monto más los fondos asignados por el presupuesto general de la Nación al Fondo Partidario Permanente, deducido el porcentaje que indica el artículo anterior, serán los recursos a repartir en concepto de aporte anual para el desenvolvimiento institucional.

Art. 15. – Los recursos disponibles para el aporte anual para el desenvolvimiento institucional se distribuirán de la siguiente manera:

- a) Veinte por ciento (20 %), en forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos;
- b) Ochenta por ciento (80 %), en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales. Sólo participarán en esta distribución los partidos que hubieran participado en la última elección.

Art. 16. – Para el caso de los partidos que hubieran concurrido en alianza a la última elección, la suma correspondiente a la alianza, en función de lo dispuesto por el inciso b) del artículo anterior, se distribuirá entre los partidos miembros en la forma que determine el acuerdo suscrito por los partidos miembros al momento de solicitar el reconocimiento de la alianza.

Art. 17. – Para el caso de los partidos nacionales, una vez determinado el monto correspondiente a cada partido, se distribuirá directamente el ochenta por ciento (80 %) a los organismos partidarios de distrito y el veinte por ciento (20 %) restante a los organismos nacionales.

Para el caso de los partidos de distrito que no hayan sido reconocidos como partidos nacionales, el monto del aporte se entregará a los organismos partidarios del distrito.

Art. 18. – Los partidos deberán destinar por lo menos el veinte por ciento (20 %) de lo que reciban en concepto de aporte anual para desenvolvimiento institucional al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación.

La violación de lo dispuesto en el párrafo anterior implicará la pérdida del derecho del partido a recibir este aporte por el término de un (1) año.

Art. 19. – El pago del aporte para el desenvolvimiento institucional sólo se efectuará si el partido ha presentado la documentación contable correspondiente al último ejercicio, en tiempo y forma, ante el juez federal con competencia electoral correspondiente.

ciones nacionales determinará el monto a distribuir en concepto de aporte extraordinario para campañas electorales. Para los años en que deban realizarse elecciones presidenciales, la Ley de Presupuesto deberá prever una partida específica destinada al financiamiento de la segunda vuelta electoral de acuerdo a lo establecido en esta ley.

El Ministerio del Interior recibirá el diez por ciento (10 %) de los fondos asignados en la Ley de Presupuesto General de la Nación al aporte extraordinario para campañas electorales, para otorgar las compensaciones a las autoridades de mesa previstas en el Código Electoral Nacional y para otorgar el aporte destinado a colaborar con los gastos de impresión de las boletas electorales. Los fondos remanentes se integrarán al Fondo Partidario Permanente.

Art. 21. – Los fondos correspondientes al aporte para la campaña electoral, previa la deducción para el Ministerio del Interior prevista en el artículo anterior, se distribuirán entre los partidos y alianzas que hayan oficializado listas de candidatos para la elección de cargos públicos electivos nacionales, de la siguiente manera:

- a) Treinta por ciento (30 %) del monto asignado por el presupuesto, en forma igualitaria;
- b) Setenta por ciento (70 %) del monto asignado por el presupuesto, en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido o alianza hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales.

Art. 22. – Para los supuestos de partidos que no registren referencia electoral anterior se establecerá un régimen especial de adelantos de fondos a través de un sistema de avales políticos o contracautelas; con la obligación de reintegrar los montos excedentes en el caso de que el caudal de votos obtenido no alcance a cubrir el monto adelantado.

Art. 23. – Para el caso de los partidos que hubieran concurrido a la última elección de diputados nacionales integrando una alianza que se hubiera disuelto, la suma correspondiente a la alianza, en función del número de votos, se distribuirá entre los partidos miembros en la forma que determine el acuerdo suscrito por los partidos miembros al momento de solicitar el reconocimiento de la alianza.

Art. 24. – Para el caso de las alianzas que no hayan participado en la última elección de diputados nacionales, se tendrá en cuenta la suma de votos obtenida en dicha elección por los partidos que la integran, o el aporte que les correspondiera como miembros de una alianza disuelta.

Art. 25. – Para el caso de los partidos nacionales, una vez determinado el monto correspondiente a cada partido o alianza, de distribuirá:

- a) Para las elecciones presidenciales, el cincuenta por ciento (50 %) a los organismos de distrito y el cincuenta por ciento (50 %) restante a los organismos nacionales;

CAPÍTULO III

Financiamiento para campañas electorales

Art. 20. – La Ley de Presupuesto General de la Nación para el año en que deban desarrollarse elec-

- b) Para las elecciones legislativas, el ochenta por ciento (80 %) a los organismos de distrito y el veinte por ciento (20 %) restante a los organismos nacionales.

Para el caso de los partidos de distrito que no hayan sido reconocidos como partidos nacionales, el monto del aporte se entregará a los organismos partidarios del distrito.

Art. 26. — Si el partido o alianza retirara sus candidatos y no se presentara a la elección deberá restituir, en el término de sesenta (60) días de realizada la elección el monto recibido en concepto de aporte para la campaña. El presidente y el tesoro del partido, así como el responsable político y el responsable económico-financiero de la campaña serán responsables de la devolución de dichos fondos.

Art. 27. — Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones, los partidos políticos que contravinieren lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 28. — El aporte público para la campaña electoral deberá hacerse efectivo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha límite para la oficialización de las candidaturas.

Art. 29. — Los partidos o alianzas que participen en la segunda vuelta en la elección presidencial recibirán como aporte para la campaña una suma equivalente al treinta por ciento (30 %) de lo que hubiera recibido aquel de ellos que más fondos hubiera recibido como aporte público para la campaña para la primera vuelta.

Art. 30. — El Estado otorgará a los partidos o alianzas que oficialicen candidaturas, espacios en los medios de radiodifusión para la transmisión de sus mensajes de campaña. El Ministerio del Interior determinará al comienzo de la campaña electoral la cantidad total y duración de los espacios a distribuir. La cantidad y duración de los espacios será distribuida en forma igualitaria entre los partidos y alianzas que hayan oficializado candidaturas.

Art. 31. — El Estado otorgará a los partidos o alianzas que oficialicen candidaturas, un aporte para colaborar con los gastos de impresión de las boletas electorales. El Ministerio del Interior determinará al comienzo de la campaña electoral el total de los recursos a distribuir. Los fondos se repartirán entre los partidos y alianzas que hubieran oficializado candidaturas en forma proporcional a los votos que hubieran obtenido en la última elección de diputados nacionales. Serán de aplicación las reglas previstas para la distribución del aporte para la campaña electoral.

CAPÍTULO IV

Financiamiento privado

Art. 32. — Los aportes privados podrán destinarse al Fondo Partidario Permanente, o directamente a los partidos políticos.

Las contribuciones o donaciones realizadas por personas físicas o jurídicas al Fondo Partidario Permanente serán deducibles para el impuesto a las ganancias hasta el límite del cinco por ciento (5 %) de la ganancia neta del ejercicio.

Art. 33. — Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente:

- a) Contribuciones o donaciones anónimas. No podrá imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante;
- b) Contribuciones o donaciones de entidades descentralizadas, nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires;
- c) Contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires;
- d) Contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar;
- e) Contribuciones o donaciones de gobiernos o entidades públicas extranjeras;
- f) Contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país;
- g) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales o profesionales y cámaras empresariales;
- h) Contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores.

Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados destinados al Fondo Partidario Permanente.

Art. 34. — Los partidos políticos no podrán recibir por año calendario contribuciones o donaciones de:

- a) Una persona jurídica, superiores al monto equivalente al diez por ciento (10 %) del total de gastos permitidos;
- b) Una persona física, superiores al monto equivalente al cinco por ciento (5 %) del total de gastos permitidos.

Los porcentajes mencionados se computarán sobre el límite de gastos establecido en el artículo 39 de esta ley.

Art. 35. — El partido y sus candidatos en conjunto, con motivo de la campaña electoral, no podrán

recibir un total de recursos privados que supere el monto equivalente a la diferencia entre el tope máximo de gastos de campaña fijado por esta ley y el monto del aporte extraordinario para campaña electoral correspondiente al partido o alianza.

Art. 36. – Las prohibiciones y límites establecidos para los partidos políticos en los artículos precedentes obligan también a los candidatos a cargos públicos electivos.

Art. 37. – Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones, los partidos políticos que recibieran contribuciones o donaciones en violación de lo establecido en este capítulo.

Art. 38. – Será sancionada con multa de igual monto que la contribución y hasta el décuplo de dicho monto, la persona física o jurídica que efectuar, aceptar o recibiere contribuciones o donaciones a los partidos políticos en violación a las prohibiciones que establece la presente ley.

Las personas físicas, así como los propietarios, directores y gerentes o representantes de personas jurídicas que incurran en la conducta señalada en el presente artículo serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios.

CAPÍTULO V

Límites a los gastos de los partidos

Art. 39. – En las elecciones a cargos legislativos nacionales, los gastos destinados a la campaña electoral que realicen un partido, sus candidatos y cualquier otra persona en su favor, no podrán superar en conjunto, la suma equivalente a un peso (\$ 1) por elector habilitado a votar en la elección.

En la elección a presidente y vicepresidente de la Nación, los gastos destinados a la campaña electoral que realicen un partido, sus candidatos y cualquier otra persona en su favor, no podrán superar en conjunto, la suma equivalente a un peso (\$ 1) por elector habilitado a votar en la elección.

A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, se considerará que ningún distrito tiene menos de quinientos mil (500.000) electores.

Art. 40. – Cuando un partido no presente candidatos o listas propias y adhiera a la candidatura presentada por otro partido o alianza, los gastos que realice se computarán dentro del límite establecido en el artículo anterior.

Art. 41. – Los gastos destinados a la campaña electoral para la segunda vuelta en la elección presidencial que realicen los partidos, los candidatos

y cualquier otra persona no podrán superar en conjunto la suma equivalente a treinta centavos de peso (\$ 0,30) por elector habilitado a votar en la elección. A los efectos de este artículo será de aplicación el último párrafo del artículo 39.

Art. 42. – Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones, los partidos políticos que no respetaran los límites de gastos establecidos en este capítulo.

Art. 43. – A los fines del cálculo del monto máximo de gastos y aportes previstos en la presente ley, los bienes y servicios serán computados conforme al valor y prácticas del mercado.

Diez (10) días antes del inicio de la campaña electoral, los medios de comunicación deberán presentar ante la Auditoría General de la Nación un informe detallado sobre las tarifas que aplicarán a los espacios de publicidad para campaña electoral. Si dichas tarifas fueran modificadas en el curso de la campaña electoral, los cambios deberán comunicarse de inmediato.

TÍTULO II

Control del financiamiento de los partidos políticos

Art. 44. – Los partidos políticos, a través del órgano que determine la carta orgánica, deberán llevar la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos, con indicación del origen y destino de los fondos y de la fecha de la operación y del nombre y domicilio de las personas intervinientes. La documentación respaldatoria deberá conservarse durante diez (10) ejercicios.

Art. 45. – El partido deberá nombrar un tesorero titular y uno suplente, cuyos datos de identidad y profesión deberán ser comunicados al juez federal con competencia electoral correspondiente, a la Cámara Nacional Electoral y a la Auditoría General de la Nación.

Art. 46. – Son obligaciones del tesorero:

- Llevar registro contable detallado que permita en todo momento conocer la situación económico-financiera del partido;
- Elevar en término a los organismos de control la información requerida por la presente ley;
- Efectuar todos los gastos con cargo a la cuenta única correspondiente del partido.

Art. 47. – El control externo de la actividad económico-financiera de los partidos políticos estará a cargo de la Auditoría General de la Nación, sin perjuicio de la intervención de la Justicia federal con competencia electoral.

La Auditoría General de la Nación y la Justicia federal con competencia electoral podrán solicitar a cualquier persona la documentación relacionada con gastos realizados por los partidos políticos y los candidatos a cargos públicos electivos nacionales.

Art. 48. – La Auditoría General de la Nación deberá controlar, auditar y dar a publicidad todo lo relativo al financiamiento público y privado de los partidos políticos.

La Auditoría General de la Nación podrá establecer los requisitos y formalidades de los balances y demás documentación contable que los partidos deban presentar.

La Auditoría General de la Nación deberá denunciar ante la Justicia federal con competencia electoral toda violación de las normas legales aplicables, remitiendo la documentación correspondiente.

Art. 49. – Dentro de los treinta (30) días de finalizado cada ejercicio, los partidos políticos deberán presentar ante la Justicia federal con competencia electoral del distrito correspondiente, el estado anual de su patrimonio y la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, certificados por el presidente y tesorero del partido y por contador público matriculado en el distrito y deberán poner a disposición de la Justicia federal con competencia electoral y de la Auditoría General de la Nación la correspondiente documentación respaldatoria.

Asimismo deberán presentar una lista completa de las personas físicas y jurídicas que hayan realizado aportes económicos en el período, detallando datos de identificación personal, identificación tributaria y monto y fecha del aporte. Esta información tendrá carácter público y podrá ser consultada libremente por cualquier ciudadano.

Art. 50. – El juez federal con competencia electoral dará traslado a la Auditoría General de la Nación de la presentación formulada por el partido para que, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles judiciales remita un informe de evaluación de las finanzas partidarias. Por el mismo plazo, la documentación presentada estará en la secretaría correspondiente para conocimiento del Ministerio Público y del público en general.

Durante ese plazo y hasta cinco (5) días hábiles judiciales posteriores a su vencimiento, podrán presentarse observaciones y reclamos sobre la veracidad e integridad de la información, sobre el cumplimiento de las normas aplicables o sobre la violación de las prohibiciones establecidas en las normas pertinentes.

Art. 51. – Vencidos dichos plazos, el juez federal con competencia electoral dará traslado al Ministerio Público del informe de la Auditoría General de la Nación y de las observaciones formuladas para que, dentro del plazo de quince (15) días hábiles judiciales, emita dictamen.

Art. 52. – Si se formularan observaciones o reclamos o estos surgieran del informe de la Audito-

ría General de la Nación o del dictamen del Ministerio Público, el juez deberá resolver sobre la cuestión y, en caso de corresponder, aplicará las sanciones correspondientes.

Si no se formularan observaciones o reclamos, y no surgieran del informe de la Auditoría General de la Nación ni del dictamen del Ministerio Público, el juez ordenará, previo al archivo del expediente, la publicación del estado anual de patrimonio y de la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación y en un diario de circulación nacional.

Art. 53. – Diez (10) días antes de la celebración del comicio, el presidente y tesorero del partido y los responsables económico-financiero y político de la campaña deberán presentar, en forma conjunta, ante el juzgado federal con competencia electoral de distrito correspondiente, un informe detallado de los aportes públicos y privados recibidos, con indicación de origen y monto, así como de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral, con indicación de los ingresos y egresos que estén previstos hasta la finalización de la misma.

Art. 54. – En el mismo plazo del artículo anterior, la Auditoría General de la Nación elevará al juez federal con competencia electoral correspondiente, un informe detallado por partido y candidato, sobre el cumplimiento de las normas del Código Electoral Nacional relacionadas con la contratación de espacios de publicidad en televisión.

Art. 55. – En el mismo plazo, el Ministerio del Interior deberá informar al juez federal con competencia electoral correspondiente, el monto de los aportes, subsidios y franquicias públicos a la campaña electoral, discriminados por rubro, monto y partido y con indicación de las sumas ya entregadas y las pendientes de pago. En este último caso, deberá indicarse la fecha estimada en que se harán efectivas y las causas de la demora.

Art. 56. – El juez federal con competencia electoral correspondiente ordenará la publicación de los informes mencionados en los artículos anteriores, en la semana previa a la fecha fijada para la realización del comicio, en un diario de circulación nacional. Dichos informes podrán ser consultados en la sede del juzgado sin limitación alguna.

Art. 57. – Treinta (30) días después de finalizada la elección, el presidente y tesorero del partido y los responsables económico-financiero y político de la campaña deberán presentar, en forma conjunta, ante la Justicia federal con competencia electoral del distrito correspondiente, un informe final detallado de los aportes públicos y privados recibidos, con indicación de origen y monto, así como de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral. Deberá indicarse también la fecha de apertura y cierre de la cuenta bancaria abierta para la campaña. Asimismo, deberán poner a disposición la correspondiente documentación respaldatoria.

Art. 58. – El juez federal con competencia electoral dará traslado a la Auditoría General de la Nación de la presentación formulada por el partido para que, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles judiciales, remita un informe de evaluación de las finanzas partidarias. Por el mismo plazo, la documentación presentada estará en la secretaría correspondiente para conocimiento del Ministerio Público y del público en general.

Durante ese plazo y hasta cinco (5) días hábiles judiciales posteriores a su vencimiento, podrán presentarse observaciones y reclamos sobre la veracidad e integridad de la información, sobre el cumplimiento de las normas aplicables o sobre la violación de las prohibiciones establecidas en las normas pertinentes.

Art. 59. – Vencidos dichos plazos, el juez federal con competencia electoral dará traslado al Ministerio Público del informe de la Auditoría General de la Nación y de las observaciones formuladas para que, dentro del plazo de quince (15) días hábiles judiciales, emita dictamen.

Art. 60. – Si se formularan observaciones o reclamos o éstos surgieran del informe de la Auditoría General de la Nación o del dictamen del Ministerio Público, el juez deberá resolver sobre la cuestión y, en caso de corresponder, aplicará las sanciones correspondientes.

Si no se formularan observaciones o reclamos, y no surgieran del informe de la Auditoría General de la Nación ni del dictamen del Ministerio Público, el juez ordenará, previo al archivo del expediente, la publicación del estado anual de patrimonio y de la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación y en un diario de circulación nacional.

Art. 61. – A partir de los mismos plazos que se establecen en este título, los partidos políticos, los responsables de campaña, el Ministerio del Interior y la Auditoría General de la Nación deberán facilitar la consulta a través de Internet de todos los datos e informes que, conforme a esta ley, deben presentar.

Los sujetos obligados deberán informar a través de los medios masivos de comunicación las direcciones en las cuales podrá encontrarse la información.

Art. 62. – Cualquier ciudadano podrá solicitar copia de los informes presentados ante la Justicia federal con competencia electoral y la Auditoría General de la Nación, así como de la documentación respaldatoria y de los informes de la Auditoría. La solicitud no requerirá expresión de causa y el costo de las copias estará a cargo del solicitante.

Art. 63. – El incumplimiento por parte de los partidos políticos de las obligaciones que surgen del título II de la presente ley traerá aparejada automáticamente la suspensión del pago de cualquier aporte público. A tal fin, vencidos los plazos pertinentes la Auditoría General de la Nación y el juez federal con competencia electoral correspondiente notificarán el incumplimiento al Ministerio del Interior.

TITULO III

Disposiciones complementarias

Art. 64. – Modifícase la primera oración del primer párrafo del inciso c) del artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado por decreto 649/97) y sus modificatorias, el que quedará redactado al siguiente tenor:

- c) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y municipales, al Fondo Partidario Permanente y a las instituciones comprendidas en el inciso e) del artículo 20, realizadas en las condiciones que determine la reglamentación y hasta el límite del cinco por ciento (5 %) de la ganancia neta del ejercicio.

Art. 65. – Incorpórase como segundo párrafo del artículo 117 de la ley 24.156 y sus modificatorias, el siguiente texto:

Compete a la Auditoría General de la Nación el control del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en los términos y con los alcances que determina la ley respectiva.

Art. 66. – Incorpórase como inciso k) del artículo 118 de la ley 24.156 y sus modificatorias, el siguiente texto:

- k) Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables anuales y las cuentas de campaña de los partidos políticos y elaborar los informes correspondientes en los términos y con los alcances que determina la ley respectiva.

TITULO IV

Disposiciones generales

Art. 67. – Las disposiciones de la presente ley referidas a los partidos políticos se aplicarán también a las confederaciones y alianzas, salvo disposición expresa en contrario.

Art. 68. – A los efectos de esta ley, las confederaciones de partidos serán consideradas como un partido.

Art. 69. – Los partidos políticos deberán adecuar su carta orgánica a las disposiciones de esta ley, en el plazo de noventa (90) días a partir de la entrada en vigencia de la presente.

Art. 70. – Deróganse las normas que integran el título V de la ley 23.298, el decreto 2.089/92, el decreto 1.682/93 y el decreto 1.683/93 y sus respectivas normas modificatorias.

Art. 71. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sr. Presidente (Menem). – En consideración en general.

Sr. Corach. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). – Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Corach. – No sé si ésta es la ocasión oportuna para solicitar una nueva preferencia, tal como se acordó en la reunión de labor parlamentaria. Si éste es el momento oportuno, haré esa solicitud ahora.

Sr. Presidente (Menem). – No es éste el momento oportuno.

Sr. Corach. – Entonces, no la hago. *(Risas.)*

Sr. Presidente (Menem). – Señores senadores: he puesto a consideración de este cuerpo las diversas iniciativas sobre reforma política, cuyo tratamiento se había pedido para esta sesión, con dictamen de comisión o sin él. En ese sentido, ruego a los señores senadores que precisen cuáles son los proyectos que se someterán a consideración del cuerpo.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

–Se llama para formar quórum.

Sr. Yoma. – Señor presidente: en la Comisión de Asuntos Constitucionales, luego del trabajo realizado, hemos decidido dividir este tema en cuatro proyectos de dictamen, de acuerdo con las materias que trata la llamada reforma política.

Estos cuatro proyectos de dictamen que, según tengo entendido, obran en Secretaría, versan sobre lo siguiente: uno de ellos, sobre el financiamiento de los partidos políticos; en otro se plantea una modificación a la Ley de los Partidos Políticos, por la que se establece un sistema de internas abiertas para la elección de candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación; el tercero se refiere a la creación en el ámbito del Ministerio Público del cargo de fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral, y el último está vinculado con modificaciones al Código Electoral sobre aspectos instrumentales y establecimiento de límites en las campañas electorales.

Es decir que se van a poner a consideración cuatro proyectos de dictamen sobre los temas referidos. A tal efecto, quiero conocer cuál es el criterio decidido en la reunión de labor parlamentaria para llevar adelante el tratamiento de

Sr. Presidente (Menem). – En la reunión de labor parlamentaria los señores presidentes de bloque han acordado tratar en conjunto en general los cuatro proyectos y luego, como corresponde, cada uno de ellos se votará por separado.

Reitero: los presidentes de bloque acordaron que se haga en conjunto el tratamiento en general de los cuatro proyectos. Ello es reglamentariamente posible, razón por la cual esta Presidencia considera que se pueda abordar su tratamiento en la forma mencionada.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. – ¿La intención de la Cámara es votar en general hoy estos proyectos? ¿Ese será el criterio a seguir?

Sr. Presidente (Menem). – Para hacer una aclaración, tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. – Le aclaro al señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales que acordamos tratar en forma conjunta en general los cuatro proyectos –incluso, creo que se ha emitido un predictamen o un dictamen–. La intención es aprobar en general estas iniciativas en la sesión de hoy y, luego, proceder a la aprobación en particular de cada una de ellas.

Sr. Presidente (Menem). – Si ningún señor senador formula alguna observación al procedimiento indicado...

Sr. Carbonell. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). – Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Carbonell. – No es para observar el procedimiento marcado por el señor presidente del cuerpo y por el presidente de mi bloque, sino para hablar en torno de los cuatro temas.

Sr. Presidente (Menem). – Está anotado en la lista de oradores, señor senador Carbonell.

Sr. Carbonell. – De acuerdo.

Sr. Corach. – Solicito que se me anote en la lista de oradores.

Sr. Presidente (Menem). – Así se hará, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. – En razón de la decisión que han tomado los presidentes de bloque, deseo pedir una preferencia para que en la próxima sesión, como primer punto, se continúe con el tratamiento de estos temas, para evitar que pase lo que sucedió con otros proyectos que se votaron

en general y quedaron dando vueltas sin que su tratamiento finalmente fuera abordado por esta Cámara.

Entonces, quisiera que votáramos ahora mismo la preferencia para que en la próxima sesión los consideremos en particular.

Sr. Presidente (Menem). — Señor senador: la Presidencia comprende su preocupación, pero sería mejor empezar ahora con el tratamiento en general, porque para votar la preferencia se necesita quórum. Sería procedente comenzar ahora y, cuando se alcance el quórum, pasar a votar la preferencia que solicita el señor senador.

Este es el criterio de la Presidencia, a menos que el señor senador prefiera esperar la formación de quórum.

Sr. Yoma. — Conociendo la danza del quórum, a la cual se suele someter esta Cámara, creo que lamentablemente no lo lograremos ni para la votación en general.

Como ya hemos empezado con la danza del quórum, trataré de ser muy breve, para extenderme sobre el asunto en ocasión del tratamiento en particular, si es que algún día se da.

Básicamente, señor presidente, este tema fue abordado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde hemos hecho un trabajo que comenzó el 7 de mayo de 2000 con la visita a la comisión del entonces ministro del Interior, doctor Federico Storani, y con la puesta en consideración de distintos proyectos de señores senadores que plantearon iniciativas vinculadas con el financiamiento de la actividad política, con la legislación electoral y con la Ley de Partidos Políticos.

Comenzamos con el análisis de estas cuestiones el 7 de mayo de 2000, se trabajó durante el año y el 26 de octubre de ese año, en una nueva visita del señor ministro del Interior, el Poder Ejecutivo giró a esta Cámara un proyecto de reforma política que contenía las ideas del gobierno en torno a este asunto.

Concretamente, el proyecto ingresó el 26 de octubre de 2000, luego de que la comisión llevara tiempo considerando iniciativas sobre el particular.

Inmediatamente después de ingresado en esta Cámara el proyecto del Poder Ejecutivo —reitero que fue el 26 de octubre de 2000—, el 7 de noviembre la Comisión de Asuntos Constitucionales se abocó a dictaminar sobre estos proyectos. Es decir que los dictámenes que va a

considerar esta Cámara tienen fecha 7 de noviembre de 2000. Con esto quiero decir que no se trata de materias nuevas ni de asuntos sobre los que vamos a sorprender a alguien. Al contrario, llevamos más de un año de trabajo en las comisiones y hemos receptado las inquietudes de todos los señores senadores, entendiendo por ello objeciones, mejoras, propuestas y adelantos ante una legislación que no era fácil de modificar. Inclusive, hemos realizado consultas con la Cámara de Diputados a través del señor secretario del Interior, doctor Martucci, para consensuar con ella los asuntos en análisis por parte del Senado.

Es decir que los proyectos que hoy se consideran en general, por lo menos desde el punto de vista teórico, gozan del más amplio consenso en este Parlamento, en los sectores políticos y entre los miembros de la comisión que en su oportunidad han hecho llegar sus aportes e ideas.

Como decía al comienzo de mi exposición, se trata de cuatro iniciativas, según la división que hemos hecho para una mejor metodología de trabajo.

Sintéticamente, las voy a formular a continuación ya que, en ocasión del tratamiento en particular, me extenderé sobre cada una de ellas.

En lo que hace al financiamiento de los partidos políticos, se pone un límite importante en el gasto de las campañas electorales, que suelen ser un gasto absolutamente engorroso, cuantioso y desgastante para los partidos y para la sociedad, que muchas veces ve con bochorno las cifras millonarias que se publicitan en torno a las campañas electorales.

Entonces, el proyecto establece un límite de un peso por elector para el gasto total de las campañas electorales nacionales.

Sr. Sapag. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Yoma. — Sí, señor senador.

Sr. Presidente (Menem). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sapag.

Sr. Sapag. — Señor presidente: quiero preguntarle al miembro informante si este límite no va a dar lugar a que se postulen candidatos económicamente poderosos y se deje sin alternativas a aquellos que no tengan un capital importante como para presentarse. Quien tenga un capital importante para ser candidato, lo puede llegar a gastar en una campaña política.

¿No se estaría utilizando un criterio selectivo, a través del cual se permitiría que una élite destacada económicamente pueda llegar a ocupar cargos políticos?

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Todo lo contrario, señor senador.

Precisamente para evitar eso, estamos poniendo un límite a los gastos, bastante reducido. Tenga en cuenta, por ejemplo, que una campaña electoral a razón de un peso por elector, significa un límite bastante estricto respecto de lo que en general se gasta. No se puede gastar más que esa cifra. No es un mínimo; no es el piso, sino el techo.

Entonces, los candidatos o los partidos que no tengan grandes recursos económicos, estarán igualados con el que sí los posea. Por más recursos de que disponga, como consecuencia del límite establecido en la ley, no los podrá gastar.

Sr. Sapag. — ¿Y el candidato que tenga recursos propios?

Sr. Yoma. — Reitero, se establece un límite de gastos de un peso por elector.

En los distritos chicos, en el caso de las provincias que tengan menos de quinientos mil habitantes, se estableció un piso mínimo. Porque si se mantiene el criterio de un peso por elector, se llegaría a una cifra realmente irrisoria.

Entonces, el mínimo es de quinientos mil pesos y el máximo es un peso por elector. Esto es lo que respecta al gasto permitido en toda la campaña electoral.

Además, a esta medida hay que sumarle la limitación del tiempo de las campañas, que en el caso de las elecciones para legisladores nacionales no pueden extenderse más de sesenta días.

Sr. Del Piero. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Yoma. — Sí, cómo no.

Sr. Presidente (Menem). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Del Piero.

Sr. Del Piero. — Señor presidente: quiero solicitarle al miembro informante una precisión.

Considero que estamos hablando de elevar el techo hasta quinientos mil pesos. No se trataría de un piso.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Si usted se sube al techo, es un piso. Si usted está en el piso, es un techo. Y si usted está en el subsuelo, es un piso.

Eso depende de dónde lo mire el señor senador.

Sr. Presidente (Menem). — ¿Quedó conforme con la explicación, señor senador? *(Risas.)*

Sr. Yoma. — Señor presidente: ya que lo vamos a tratar en particular, solicito que no nos extendamos con las explicaciones.

Sr. Presidente (Menem). — Creo que es correcto lo que acaba de decir el señor senador. Cuando pasemos al tratamiento en particular, daremos las precisiones del caso.

Simplemente se está haciendo la fundamentación en general de este asunto; no entremos a particularizar porque, si no, el debate va a ser interminable.

Estamos hablando de las iniciativas en general.

Sr. Corach. — ¿Me permite una manifestación en minoría...?

Sr. Yoma. — Yo estoy en uso de la palabra.

Sr. Corach. — Señor presidente: voy a pedir, entonces, al señor senador Yoma una interrupción en minoría. ¿Puede ser?

Sr. Presidente (Menem). — No es en minoría.

Sr. Yoma. — No es en minoría, señor ex ministro del Interior. *(Risas.)*

Igualmente le concedo el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador Corach.

Sr. Corach. — Señor presidente: creo que la danza del quórum a que hacía referencia el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, está adquiriendo un ritmo vertiginoso, porque ya estamos con veintiséis señores senadores.

Por ello, solicito —seguramente no es lo habitual en este recinto— que si llegamos a conseguir quórum en algún momento del futuro inmediato de esta sesión, la Presidencia someta a votación directamente en general los cuatro proyectos. Porque de lo contrario, creo que este Senado va a pasar el lamentable papelón histórico de haber convocado —después de tantas dilaciones y postergaciones— a una sesión para tratar una modesta reforma política, y que el cuerpo se quede sin quórum.

Sr. Presidente (Menem). — Señor senador: ya se aclaró el procedimiento a emplear.

Cuando se termine la consideración en general procederemos a votar, pero no se pueden

votar en general en forma conjunta, sino que debemos hacerlo separadamente, por cuanto puede haber señores senadores que estén de acuerdo con algunos proyectos y no con otros...

Sr. Corach. — Pero no me refiero a eso, señor presidente.

Propongo que cuando esta Cámara consiga quórum —si es que lo consigue— se interrumpan los discursos y se practique la votación en general de todos los proyectos involucrados, uno por uno. De lo contrario, no vamos a poder votar...

Sr. Presidente (Menem). — Señor senador: cuando llegue el momento oportuno, formule la moción de orden correspondiente. Los señores senadores que estén anotados para hacer uso de la palabra y no hayan hablado hasta ese momento podrán ejercer su derecho de oponerse a su moción.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: además de la limitación en los gastos que pueden efectuar los partidos políticos con relación a cada elección, el proyecto establece una limitación en los aportes que ellos pueden recibir, tanto en lo que respecta al Fondo Partidario Permanente como en los aportes directos.

En ese sentido, los partidos políticos no podrán recibir por parte de una persona física o jurídica más del 5 o 10 por ciento, respectivamente, con relación al gasto total permitido. Es decir, se establece una limitación muy fuerte en los montos que cada partido puede recibir en concepto de aportes privados.

Además, con respecto a los aportes privados al Fondo Partidario Permanente existen determinados incentivos impositivos para el contribuyente, como una manera de reducir el presupuesto de la Nación en materia de financiamiento a los partidos políticos y a las campañas electorales.

Al comienzo de mi exposición señalé que esta limitación en el gasto y en los aportes guarda relación con el límite establecido para las campañas electorales. En efecto, a través de esta iniciativa se produce una sensible disminución en el gasto de los partidos, pero no sólo porque esos gastos tienen un tope —que no se puede exceder—, sino porque también existe una limitación en el tiempo, toda vez que no pueden existir campañas electorales que duren más de 60 días, en el caso de aquellas tendientes a elegir legisladores nacionales, o de 90 días para el caso de elec-

ciones para presidente y vicepresidente de la Nación. De esta manera se logra una real disminución de los gastos de las campañas políticas.

En lo que respecta al control del movimiento de los fondos de los partidos políticos, se dispone la creación de la figura del fiscal general, quien va a actuar ante la Cámara Nacional Electoral, asistido por un cuerpo de peritos y por fiscales adjuntos. Ello tiene como objetivo lograr un efectivo control sobre el movimiento de los fondos, así como controlar su origen y su destino. Realmente, creo que es importante la creación de dicha fiscalía, ya que actualmente sólo existe un fiscal que actúa en primera instancia y cumple las dos funciones, razón por la cual no puede, de ninguna manera, ejercer un control efectivo sobre la vida económica y patrimonial de los partidos, así como tampoco sobre el movimiento, origen y destino que dan a esos fondos. Además, es algo importante por cuanto dichos fondos también podrán ser sometidos al control de la Auditoría General de la Nación.

Por otra parte, existen penalidades —que ya están establecidas en la legislación vigente— que van desde multas hasta el retiro de la personería jurídica o la devolución de los aportes recibidos, a la vez que son solidariamente responsables las autoridades de los partidos que infrinjan dicha legislación. En ese sentido, creo que se mantienen las figuras jurídicas actualmente vigentes, pero se establecen aumentos en algunas sanciones, fundamentalmente en aquellas que se refieren a la inhabilitación para ejercer funciones públicas para quienes infrinjan esta legislación.

En el dictamen referente a la vida interna de los partidos políticos se establece una modificación a la Ley de Partidos Políticos para hacer obligatorio el sistema de internas abiertas para todos los partidos en los casos de elección de presidente y vicepresidente de la Nación.

Señor presidente: me están solicitando una interrupción; la concedo.

Sr. Presidente (Menem). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. García Arecha. — Señor presidente: me consta la preocupación que ha tenido el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y el largo tratamiento que se ha hecho de estos temas durante muchos meses.

Como no integro dicha comisión, quería preguntar si en algún momento se consideró que esta obligatoriedad de las elecciones internas abiertas para los candidatos a presidente y vicepresidente se ampliara para la elección de los candidatos para los cargos nacionales, como los de senador y diputado.

Sr. Yoma. – Hubo propuestas de algunos señores senadores, pero no se llegó al consenso que se requería. Recuerdo que el señor senador San Millán, por la provincia de Salta, concretamente propuso la obligatoriedad de internas abiertas para legisladores nacionales; incluso preveía que se hicieran en forma simultánea. No se llegó a consenso para que las elecciones fueran simultáneas ni para que se hicieran en el caso de legisladores nacionales. Por lo tanto, hemos preferido no incorporar este tema porque no había consenso suficiente.

Sr. Presidente (Menem). – El señor senador por la Capital le solicita otra interrupción..

Sr. Yoma. – La concedo.

Sr. García Arecha. – Quiero dejar aclarado que en el tratamiento en particular voy a solicitar que se incorporen los cargos de senadores y diputados nacionales en las internas abiertas.

Sr. Presidente (Menem). – Prosigue en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. – Señor presidente: por último, para no extenderme demasiado y dejar lugar a la posibilidad de que reunamos quórum de manera que se vote en general, señalo que otra modificación importante a esta legislación establece que el 20 por ciento de los fondos de cada partido debe ser destinado a la formación de dirigentes.

Hay una modificación importante al Código Electoral Nacional, que es imprescindible que se vote. Es más, yo pediría que en el tratamiento en particular este tema de la modificación al Código Electoral sea el primero en resolverse porque se establecen dos cuestiones que hacen a la transparencia en los procesos electorales. Una de ellas es una propuesta de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el sentido de dar la posibilidad al Ministerio del Interior para que, con el 10 por ciento de los recursos, pague un viático u otorgue un franco compensatorio —en su caso— a los empleados públicos que deban desempeñarse como autoridades de mesa. Esto es así porque en las últimas elecciones cada vez se hizo más grave la situación de la falta de

constitución de mesas por ausencia de las autoridades que habían sido convocadas para cumplir con dicha carga pública. Esta situación es mucho más grave en la zona rural, afectando la transparencia de los procesos electorales. En efecto, en las zonas rurales muchas veces ocurre que el día de las elecciones el 70 por ciento de las mesas no se constituyen sino hasta las 10 u 11 de la mañana porque no llegan las autoridades correspondientes. Por eso digo que es importante el tratamiento de este tema para que el Ministerio del Interior pueda contar cuanto antes con esta autorización.

Otra modificación al Código Electoral es la limitación a la cantidad de electores por mesa. Actualmente son 450 los permitidos por cada mesa.

Otra cuestión, que ya fue motivo de tratamiento, es la propuesta de prohibición de la difusión de las llamadas “encuestas en boca de urna” durante el horario de las elecciones y hasta tres horas posteriores al cierre del comicio.

Esta es sintéticamente la parte sustancial de los proyectos que estamos tratando.

Por último, quiero señalar que el tema que hoy consideramos constituye el comienzo de una profunda reforma que deberemos realizar, vinculada con el costo de la actividad política en la Argentina. Comenzamos con el costo de las campañas electorales, pero no se nos escapa —y, en lo personal, esto ha sido motivo de trabajos que hemos comenzado a realizar en la Comisión de Asuntos Constitucionales a partir de un proyecto del que soy autor junto con el señor senador Maya— que es necesario efectuar la reducción de la burocracia política, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Esto tiene que ver con el verdadero sobredimensionamiento del Estado, verificado a través de los numerosos concejos deliberantes o legislaturas provinciales. Por supuesto que también será posible reducir el número de miembros del Congreso Nacional. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados de la Nación esto se conseguiría con sólo modificar la base de representación establecida por ley. Actualmente la relación es de un diputado por cada 160.000 habitantes. Si lleváramos esa relación a un diputado cada 250.000 habitantes, lograríamos reducir en 105 la cantidad de diputados actuales, sin que para esto sea necesario reformar la Constitución ni nada que se le parezca. Para dar un ejemplo del sobredimensionamiento que tenemos en nues-

tro país, citaré el caso de los Estados Unidos, donde hay un diputado cada 633.000 habitantes, y cien senadores para 250 millones de habitantes en 50 estados, por supuesto. En nuestro país tenemos 35 millones de habitantes y 70 senadores.

Entiendo que es posible producir una reducción en la burocracia política del Estado sin afectar la representación de las minorías, estableciendo sistemas proporcionales de distribución. Luego podemos seguir con las Legislaturas provinciales y con los concejos deliberantes. Creo que ésta es la segunda parte —y la más importante— de la profunda reforma política que debemos encarar, la cual tiende a la disminución de los costos de la política. Si la encaramos, alejaremos algunas propuestas disparatadas que uno escucha por estas horas, que no tienen mucho que ver con un trabajo serio en torno a este tema sino que apuntan al márketing electoral. El hecho de convocar a plebiscito para preguntar al pueblo si está de acuerdo con que haya menos diputados o menos senadores es como preguntar al pueblo si está de acuerdo con que aumentemos a los docentes o a los jubilados. Es tan obvia la respuesta que podríamos ahorrarnos ese paso. Directamente el presidente de la República se podría reunir con los gobernadores de provincias a fin de tomar una decisión en cuanto a una drástica reducción de la burocracia política, sin llegar a esto que —reitero— tiene más que ver con el márketing político que con la eficacia que el pueblo espera de nosotros en esta cuestión.

Por otra parte, señor presidente, creo que esto se podría realizar por medio de una ley convenio que se celebre entre la Nación y las provincias argentinas. De este modo se conformaría un fondo para generar empleo y contención social en las provincias que adhieran a este sistema de reducción de su burocracia política. Nosotros hicimos estudios económicos en ese sentido y advertimos que en mi provincia, La Rioja, el ahorro que se produciría con el hecho de llevar a la práctica esta reducción sería tan importante que la cifra rondaría los 2 millones de pesos por mes, que podríamos destinar al empleo y a la contención social, sin un discurso facilista, demagógico o de márketing, pero tomando una decisión de Estado como es aquella que permita achicar las burocracias políticas, la cual debe ser llevada adelante por el presidente y los gobernadores de las provincias argentinas.

Señor presidente: espero que podamos considerar y votar este tema en el día de hoy a fin de que luego podamos abocarnos al segundo paso, consistente en el tratamiento de la reforma estructural de la burocracia política en el país.

Sr. Presidente (Menem). — Antes de dar la palabra al segundo orador, solicito a los señores senadores que tengan intención de exponer que la manifiesten en este momento, para que los señores senadores puedan tener una idea de la duración que puede tener esta sesión. Hasta el momento han solicitado el uso de la palabra ocho señores senadores.

Señor senador Funes: ¿lo anotamos en la lista?

Sr. Funes. — Quería hacer una simple referencia, señor presidente.

Le iba a solicitar una interrupción al señor senador Yoma, porque en la segunda parte de su disertación no hizo referencia a un tema que estuviera en tratamiento en este recinto, pero igual lo trajo a colación.

Se supone que hoy estamos discutiendo —y lo seguiremos haciendo si hay quórum— la reforma política referida a los partidos políticos.

Sr. Presidente (Menem). — Está bien...

Sr. Funes. — El problema de la reestructuración, es decir, lo que él llama “la burocracia estatal” es un tema que también hay que abordar, pero hay varias iniciativas al respecto y todas deben ser consideradas.

Sr. Presidente (Menem). — Señor senador: como eso no está en discusión, le solicito que...

Sr. Funes. — Justamente por eso quería hacer mención de que no hay un solo proyecto sino varios, y varias formas de resolver la cuestión.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Molinari Romero. — Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical adelanto nuestra adhesión a estos cuatro dictámenes que obran en Secretaría.

Cuando esta tarde ingresamos en el recinto fuimos absolutamente conscientes de que tal vez era mucho mayor la expectativa que habíamos despertado ante la opinión pública con el tratamiento de estos proyectos, que lo que en realidad vamos a aprobar.

Y esto lo hemos hablado durante mucho tiempo con los distintos senadores, tanto con los que integran la comisión como con el resto de los

que componen este cuerpo, porque todos están preocupados por estos temas ya que permanentemente reciben en su distrito la inquietud de aquéllos a quienes representan.

Sin duda esto hace que lleguemos a un primer estado de convicción, tal cual lo señalaba el señor senador Yoma. Este es el comienzo de un proceso de reforma política en el país que se inicia hoy y que no debe tener como objetivo ponerle una bomba al sistema político —expresión que he leído esta mañana en algún periódico y que fuera utilizada por algún funcionario nacional— sino apuntalar los cimientos del sistema político y democrático en la Argentina.

Por lo tanto, con modestia, pero abordando temas centrales del funcionamiento del sistema democrático, vinimos esta tarde a discutir estos cuatro dictámenes. Y digo “temas centrales” porque no es poco lo que ha mencionado el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En efecto, estamos abordando un tema fruto de la coincidencia de voluntades políticas entre muchos señores senadores que presentamos proyectos individuales, y del propio Poder Ejecutivo, expresada por el señor presidente Fernando de la Rúa cuando enviara su proyecto al Congreso de la Nación y cuando en la Asamblea Legislativa del 1º de marzo reiterara su voluntad de que estos temas fueran tratados.

Efectivamente, encontramos coincidencias en la necesidad de avanzar en lo que respecta al control sobre el financiamiento de los partidos políticos; es decir, un tema que durante mucho tiempo ha sido tabú y respecto del cual era mejor “esquivar el bulto” antes que abordarlo como se encaran estos despachos: con consistencia, y no solamente con la aplicación de normas. En todo el mundo está probado que no basta con la sanción de legislaciones modernas, tal vez hasta imaginativas, creativas e innovadoras, sino que, en cuanto al tema del financiamiento, lo que realmente se necesitan son mecanismos de control eficientes que aseguren a aquel ciudadano que deposita su voto la posibilidad de conocer cómo ha hecho ese candidato para financiar su campaña política.

En los proyectos en consideración estamos avanzando fuertemente a efectos de lograr transparencia gracias a la incorporación de elementos que tienen que ver con la responsabilidad funcional. En este caso, como es tradicional y pacífico, estamos atribuyendo esta cuestión a la Justicia federal con competencia electoral,

pero además hacemos recaer en la Auditoría General de la Nación el contralor del origen de los fondos utilizados, incluso antes de la finalización de la campaña.

Esto no es algo modesto ni poca cosa, señor presidente. Se trata de una innovación que debe ser puesta en conocimiento de la gente, que tal vez espera que hoy discutamos la reducción de las remuneraciones de los senadores y de los diputados. Lo cierto es que estamos ante una cuestión importante porque hace a la eficiencia y limpieza del sistema político, ya que permitirá que incluso diez días antes de una elección deba someterse a contralor de los mecanismos previstos por estas modificaciones el origen de los fondos utilizados en la campaña. Pero avanzamos mucho más, toda vez que proponemos colocar esta información a disposición de la ciudadanía a través de los métodos modernos de difusión tales como Internet.

Señor presidente: esta iniciativa constituye una gran innovación en el sistema legislativo argentino en lo que hace al financiamiento de los partidos políticos. Sin duda, se trata de modificaciones parciales a un cuerpo central vigente, que no dejamos de lado en ningún momento.

Por supuesto que siempre existirá la contradicción o la tensión entre la realidad y la ley. Por ejemplo, en los periódicos de hoy pudimos leer cómo el presidente de una de las más importantes repúblicas del mundo está sospechado de corrupción en el financiamiento de su campaña electoral.

Evidentemente, la norma nunca podrá contemplar todas las alternativas que puedan darse en la realidad, pero sí podrá ir más allá del marco normativo estableciendo la posibilidad de contralor y de sanción a quien desvíe el origen o la licitud de sus procedimientos.

Además, señor presidente, con esto estamos dando cumplimiento a una norma constitucional. Usted, señor presidente, que presidió la Convención Constituyente de 1994, sabe bien de qué estoy hablando al recalcar que los convencionales de Santa Fe exigieron una mayoría especial para sancionar normas que tuvieran que ver con sistemas electorales o con el régimen de los partidos políticos.

La Constitución exige la mayoría absoluta de los miembros de las Cámaras; y no es un capricho de los convencionales constituyentes. Se trata de la necesidad de que detrás de cualquier

modificación de este tipo exista un trabajo de consensos y de acuerdos que pueda dejar fuera de los turnos electorales o políticos las modificaciones que se lleven a cabo.

Antes de 1994 la orientación de la legislación dependía del humor de quién gobernara. Hoy debe ser producto del consenso de las fuerzas políticas de la Argentina. De lo contrario, es imposible lograr la sanción de una norma de este tipo en cualquiera de las dos Cámaras.

Quiero señalar, además, que esta normativa —que ojalá hoy podamos sancionar en general— constituye una clara respuesta frente a algunas de las demandas de la sociedad relativas al gasto de la política, como bien lo ha señalado el senador Yoma. Pero también quiero decir al respecto que no voy a “comprar” el discurso de ciertos comunicadores sociales que no buscan la eficiencia del sistema político sino —en muchos de sus mensajes— la destrucción de las bases de representación política en la Argentina.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador Felipe Sapag.

Sr. Molinari Romero. — Hasta el 9 de diciembre de este año ejerzo un mandato en nombre de la provincia de Córdoba y en nombre de mi partido, la Unión Cívica Radical. Sé que esta posición es compartida por muchos señores senadores.

La eficiencia en el sistema político no puede significar la destrucción del sistema de representación política de la Argentina. Cualquiera sea el costo que se deba pagar creo que es extremadamente peligroso confundir cuáles son los objetivos que hoy están en discusión en la Argentina.

Me preocupa sobremanera que incluso aquellos que ejercen magistraturas públicas, producto del voto popular del cual no gozamos nosotros —salvo algunas excepciones en la composición de este cuerpo—, estén propugnando la destrucción de las bases del sistema constitucional federal de nuestra República. Todos los días nos levantamos escuchando hablar, desde Buenos Aires, sobre la necesidad de la modificación de las reformas políticas. Pido disculpas a los habitantes y representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero pareciera que desde un escritorio de esta ciudad se pudiera

resolver sin más cuál es el destino de cada una de las provincias y municipios de la Argentina.

¡Por favor! ¡En el discurso político no caigamos en el oportunismo político! Ello significa causar confusión en la sociedad y, en todo caso, llegar a bastardear los objetivos que sí compartimos, que son dotar de eficiencia al sistema de representación y saber que el sector político que la ejerce no puede estar ausente en los esfuerzos y sacrificios del conjunto de la sociedad argentina. Por el contrario, debe hacer su contribución en estos momentos tan difíciles para el país.

Pero en los últimos treinta días hemos venido observando un límite impreciso entre estos dos conceptos. Pareciera que todo aquello que implique representación popular significa corrupción o privilegio. Por supuesto que hay errores y es necesario corregirlos; también existen excesos y hay que contenerlos; también tenemos la necesidad de producir modificaciones en las estructuras constitucionales de las provincias, pero respetando la propia estructura normativa de cada una de ellas.

Señor presidente: estoy absolutamente convencido de que hoy estamos dando un paso hacia adelante pero también lo estoy de que la tarea no termina aquí, como lo dijo el señor senador Yoma.

En consecuencia, ojalá podamos aprobar la preferencia que hemos acordado en la reunión de labor parlamentaria para que se traten otros proyectos que tienen que ver con la modificación del sistema electoral en la Argentina, y para lograr la eliminación de las listas sábanas, tema reclamado y demandado por la sociedad que representamos.

Por lo tanto, que nadie crea que hoy comienza y se agota la reforma política. Allí está el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, tratando de encontrar las bases de lo que significa un acuerdo integral en el país.

Los propios gobernadores deben comprometerse a impulsar estas iniciativas, dentro del marco normativo de su propia provincia y con las limitaciones que en muchos casos tienen para poder actuar. Digo esto porque en mi provincia el gobernador tiene vedada la posibilidad de impulsar cualquier proceso de reforma constitucional. No obstante, entiendo que deben manifestar su voluntad política de llevar a cabo, en cada uno de sus distritos, las modificaciones que hagan falta.

Creo, señor presidente, que con estas salvedades, previsiones o advertencias debemos estar tranquilos. No hemos recorrido, ni vamos a recorrer, todo el camino esta tarde, pero si sometemos a votación hoy y completamos la discusión en particular de estos cuatro proyectos, tengan la absoluta seguridad de que hemos comenzado a saldar una deuda con la sociedad argentina, que es la de hacer más eficaz el sistema de representación.

Sr. Presidente (Şapag). – Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. – Señor presidente: éste es un día realmente importante y espero que logremos, al menos, votar en general estos proyectos. Adelantó en ese aspecto mi voto favorable en general aunque tenga algunas discrepancias, que las voy a plantear durante el tratamiento en particular.

Y digo que es un día importante porque estamos dando los primeros pasos, de los varios que debemos dar en el futuro, para satisfacer algunas demandas de la sociedad argentina.

La dirigencia política está desprestigiada y carente de credibilidad; la gente no confía en los políticos. Creo que tenemos que dar los pasos necesarios para lograr la transparencia y poder recuperar la credibilidad actuando con responsabilidad, seriedad, honestidad y, sobre todo, con total claridad frente a nuestros compatriotas.

He presentado el año pasado un proyecto de ley, contenido en el expediente S.-869/00, que se refiere al financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Esa iniciativa, sin duda alguna, no constituye una solución integral –falta mucho camino por recorrer–, pero creo que es un principio de respuesta para nuestros compatriotas y para toda nuestra comunidad. Digo esto porque, a pesar de que en la sesión de hoy nos cuesta mucho mantener el quórum, es indispensable acelerar el tratamiento de este tema a efectos de poder someter a votación, al menos en general, los proyectos en consideración.

Podría seguir haciendo uso de la palabra pero la cantidad de oradores anotados y el quórum estricto con el que contamos me llevan a abreviar mi exposición. La situación creada en el país hace que un tema de tanta trascendencia e importancia deba ser considerado con la urgencia que requiere. Creo que tenemos la obliga-

ción de ser austeros, reducir los gastos y acortar los plazos de las campañas electorales, reduciéndolas a dos meses para los distintos cargos y a tres meses para la elección de presidente y vice, cargos para los cuales coincido en la fijación de elecciones internas abiertas.

Hay otras reflexiones que quisiera formular, pero por su extensión voy a pedir que se inserten en el Diario de Sesiones, a efectos de facilitar y posibilitar que esta cuestión pueda ser sometida a votación en la sesión de hoy.

Sr. Presidente (Şapag). – Tiene la palabra el señor senador Cafiero.

Sr. Cafiero. – Señor presidente: voy a coincidir con el señor senador por Córdoba en cuanto a que estos proyectos de ley que vamos a discutir y votar, comparados con la gravedad de la crisis política que vive nuestra República, van a aparecer para muchos como insuficientes. Yo también experimento la sensación –y no tengo una respuesta válida para ello– de que la que se ha dado en llamar la clase política todavía no ha dado una respuesta profunda y categórica a esta crisis que está sobreviviendo.

Entonces, mis reflexiones, que van a concluir con alguna referencia al tema concreto que estamos empeñados en considerar, apuntarán a tratar de situar el problema de la crisis política. Porque no intentaríamos esto que se llama la reforma política si no admitiéramos que nuestra actividad, esta profesión que hemos elegido, esta vocación que seguimos, está sufriendo una profunda crisis.

A tal efecto, he comenzado por recordar qué es la política. Para ello, he releído a Aristóteles, quien sostenía que el hombre no es ni bestia ni dios; es un *zoon politikon*, es un hombre político. Porque es el único ser vivo que se agrupa en sociedad y, al agruparse en sociedad, comienza un proceso de convivencia social organizada, pero también de disensos y conflictos. Entonces, aparece la política, a la que Aristóteles le dedicó muchas cosas buenas. Allí aparecen algunos aspectos distintos y complementarios de la política.

Según Max Weber, la política tiene dos formas de expresarse: una es la faz agonal, que está dada por la competencia por el poder en la que todos, de una u otra manera, estamos sumergidos porque, de lo contrario, no estaríamos ocupando estas bancas. Y la otra es la faz arquitectónica; la política no es sólo competencia

por el poder; sino también creación de proyectos, propuestas y construcciones arquitectónicas alrededor del bien común, que es la tarea o el objetivo del político.

¿Quiénes son los políticos? Weber se preguntaba: ¿quiénes son estas personas que se atreven a poner sus dedos en los rayos de la rueda de la historia? ¿Quiénes son estos hombres, estas mujeres, que quieren contradecir el orden natural y quieren, de alguna manera, introducir factores voluntarios en la vida social? Esto es lo que venimos a denominar políticos. Perón los caracterizaba: decía que el político que realmente cumple su misión en la vida es aquel que tiene el óleo sagrado de Samuel —es decir, un carisma especial— y que la vocación política —o la vocación a secas— y las huellas digitales son las únicas formas de distinguir a las personas.

Señor presidente: los políticos tenemos una profesión y una actividad que últimamente ha venido perdiendo credibilidad y prestigio. Y eso se debe a dos factores externos a los políticos. Uno, es lo que se ha dado en llamar la licuación de los espacios públicos. El otro es el permisivismo o, mejor dicho, la pérdida de valores que, en realidad, experimenta toda la sociedad porque la crisis de la política es también una crisis de aquella.

La licuación de los espacios públicos es lo que permite hablar de la decadencia de la política, cuestión sobre la que deseo hacer algunas reflexiones.

En mi larga vida política he vivido circunstancias de distinto carácter y, por supuesto, muy contradictorias. Recuerdo una de ellas. Corría el año 1956. Los abogados que están en esta sala saben que en los subsuelos del Palacio de Justicia, en la intersección de las calles Lavalle y Talcahuano, existe un espacio que se llama “la leonera”. Quien ha sido defensor de presos políticos o quienes han litigado en los tribunales saben que existe este espacio, un lugar de treinta metros de largo por quince de ancho. Allí es donde se alojan o se juntan los presos de las distintas cárceles o comisarías cuando son citados por los jueces que tienen su despacho en el Palacio. Entonces, mientras esperan para declarar, deben convivir en este reducido espacio. Uno puede encontrar juntos allí a ladrones, asesinos, traficantes de drogas, violadores, asaltables, estafadores, etcétera.

Junto con algún colega me tocó estar allí cuando nos citaba algún juez de la llamada Re-

volución Libertadora. Especialmente, recuerdo una mañana en la que fui compungido, o al menos con el ánimo algo mellado —era duro enfrentar esa realidad—, ya que quizás ese lugar podía asociarse al infierno del Dante por los gritos, chanzas entre los distintos malhechores y círculos de delincuentes. Por ejemplo, algo característico es el de los violadores de menores, que son apartados y hasta atacados por otros círculos de delincuentes.

Entonces, junto con mi colega o amigo nos sentamos en uno de los bancos de cemento y mirábamos con atención a un individuo alto, de pelo largo y rojizo, muy poco formal en su vestimenta, con su camisa abierta, que gesticulaba y gritaba como uno de los líderes más importantes de estas asociaciones o grupos delictivos. Observamos que el hombre dejó su grupo, comenzó a transitar el salón y cuando pasó frente a nosotros, como seguramente advirtió que no teníamos apariencia delictiva —por lo menos, no la habíamos adquirido aún— (*risas*), se paró y me dijo: “¿ustedes qué hacen acá?”. Tímidamente le contesté: “Somos políticos”. Su reacción fue exclamar: “¡Políticos!” y me largó una escupida. Dejo a criterio de cada uno de ustedes el simbolismo de este hecho.

¿Cuántos habrá que denuestan la política y en sus vidas privadas o profesionales son tanto o más delincuentes que esos con los cuales tuvimos que convivir un rato, por supuesto muy desafortunado!

Decía recién, señor presidente, que la actividad del político está cuestionada por dos factores que son ajenos a nuestra profesión. Uno de ellos es la licuación de los espacios públicos, sobre lo cual se ha escrito mucho en Francia. Así, el antropólogo Marc Augé ha hablado de la cultura de los no lugares, identificando como tales a los shoppings, a los megacentros comerciales en donde sólo se consume o se transita. Nadie tiene sentido de pertenencia a esos lugares, en los que se está, pero no se es.

Y éstos son los lugares en donde con más asiduidad y en mayor número concurre la gente; pero no van a las plazas públicas, en donde históricamente la política tuvo su escenario desde los tiempos de los griegos.

Dice Jean Touchard en su *Historia de las ideas políticas*, que para los griegos la ciudad era un marco para la reflexión política. Comenta que la ciudad no era sólo una aglomeración

urbana, sino también una unidad política. Y allí, en el ágora, se sucedían los grandes debates y las reflexiones políticas y sociales.

Más adelante, a partir del siglo pasado, en nuestra época contemporánea, todos fuimos testigos de las grandes muchedumbres en la calle, convocadas por consignas movilizadoras. Y de esto no hace mucho tiempo. Se generaban así estados colectivos y se fijaban grandes objetivos nacionales, por los cuales se movilizaba la gente. Esto permitió que se ensanchara el escenario de la política.

Pero hoy la política se ha retirado de los espacios públicos, y se ha refugiado en los sets de televisión.

El debate y la competencia en el discurso ya no se hacen a cara descubierta, en el centro de una plaza o en la esquina de una calle; se hace en los sets, a raíz de lo cual, si bien la política no ha muerto, ha retrocedido y ha perdido espacio público.

Recuerdo que antes, cuando hacíamos un acto público, nos preocupábamos por saber cuáles eran las columnas movilizadoras que concurrirían al acto. Cuántas veces hemos preguntado “la columna de la CGT ¿cuándo llega?”, “¿cuándo llegan los muchachos de la Juventud” o “¿cuándo aparecen las mujeres?”, que también empezaron a protagonizar los actos políticos. ¿Saben lo que se pregunta en la actualidad?: “¿Llegó Canal 13?”

Ya no interesa el hecho conmovedor o movizador de la política, sino lo que aparece en los medios de televisión.

Entonces, esta suerte de pérdida o licuación de los espacios públicos también ha conspirado contra el prestigio, las vivencias y la importancia de la política.

También ha influido mucho en nuestra actividad el relativismo ético; la licuación de valores. Vivimos una época—como ya la hemos descrito en otras intervenciones—en donde es notorio el auge del pensamiento débil y la civilización de lo efímero.

Señor presidente: nadie se enamora de la tasa de interés ni del producto bruto; lo siento por los economistas. Pero esa fuerza movilizadora, que en algún tiempo nacía del impulso encantador de la utopía, también ha desaparecido del escenario de la política.

Sin embargo, los jóvenes han comenzado a hacer una revisión de esta situación. A los jóve-

nes no les encanta una sociedad movida solamente por intereses y apetencias economicistas. Y algunos vuelven a las utopías.

Rescato con interés—aunque no con adhesión, por ahora—las figuras del Che y de Evita. Vuelven a ser simbólicas, como si algún sector de la juventud comenzara a recrear la fantasía de la utopía. Esta sociedad sin valores ha generado el denominado hombre *light*, es decir, el hombre ligero.

Enrique Rojas, autor de dicha creación, dice que vivimos en una sociedad triste, sin ilusión, distraída por cuestiones insustanciales y cercados por el materialismo, el hedonismo, el permisivismo y el consumismo, que son las nuevas formas posmodernas de la libertad. Dicho autor considera que no hay entusiasmo desmedido ni heroísmo; que todo es suave, ligero, sin riesgos, con la seguridad por delante. Un hombre así no dejará huella. En su vida ya no hay rebeliones, puesto que su moral se ha convertido en una regla de urbanidad, o en una mera actitud estética.

Nosotros, en cambio, creemos que a ese hombre le falta politicidad; menos shopping y más espacios públicos; menos *Miniphone* y más diálogos cara a cara; menos información y más formación.

En esta caída vertical de valores está afirmada esta suerte de decadencia de la política, la cual no sólo tiene cultores en los medios sino que también es objeto de ridiculización en los teatros, en la televisión y, a veces, en expresiones de la vida social, que me duele constatar que en nuestro país a menudo pierden el sentido de la realidad.

Y me refiero concretamente a lo expresado por algunos obispos de la Iglesia Católica, quienes no vacilan en atacar a la política como si ésta estuviera asociada a alguna facción demoníaca.

Sin embargo, he rescatado una pastoral de los obispos franceses en la cual ellos dicen cosas que me gustaría que, por lo menos alguna vez, repitieran sus pares de mi patria.

En dicha pastoral dicen así: “La política es una obra colectiva permanente, una gran aventura humana. Sus dimensiones se renuevan y amplían sin cesar; atañe a la vez a la vida cotidiana y al destino de la humanidad, en todos sus niveles. La imagen que de ella tiene nuestra sociedad necesita ser revalorizada. Es una acti-

vidad noble y difícil. Los hombres y mujeres comprometidos con la política, así como todos aquellos que quieren contribuir al «vivir juntos» merecen nuestro aliento”.

Luego continúan señalando los obispos franceses lo siguiente: “Los centros de decisión parecen alejarse y perderse en el anonimato reduciendo los márgenes para la iniciativa. Los responsables políticos y sociales se enfrentan a la complejidad de los problemas, a la urgencia del momento, a la lógica despiadada de los mercados... Una clase dirigente aislada de las preocupaciones cotidianas de la población no podría mantener sus promesas. Se amplía la brecha entre la oferta de las instituciones y la demanda de los ciudadanos... Todo esto redundará en una importante reducción de la militancia, en una participación electoral irregular, un ausentismo creciente, una disminución de los inscriptos en las listas electorales, sobre todo en las generaciones jóvenes.

“Frente a este cuestionamiento afirmamos que la política es esencial: una sociedad que la desestima corre peligro... La nobleza del compromiso político es innegable. Los abusos que existen no deben ser el árbol que oculta el bosque formado por todos quienes animados por el deseo de justicia y de solidaridad, se desviven por el bien común y conciben su actividad como un servicio y no como un medio para satisfacer su ambición personal.

“Denunciar la corrupción no es condenar a la política en su conjunto ni justificar el escepticismo y ausentismo respecto de la acción política”.

Hay un escritor que me gustaría citar, Josep Ramoneda, que en un libro muy interesante llamado *Después de la pasión política* se refiere precisamente a estos temas.

Asimismo, Claudio Magris, en un artículo del diario “La Nación” dice: “Ahora es la economía la que proclama su primacía, y degrada a la política a ser su sirvienta, mera superestructura, diría Marx, el más radical profeta de la supremacía absoluta de la economía, aunque haya sido el profeta de un sistema económico antitético al que hoy a triunfado”.

Es decir, si entiendo bien, la política está jaqueada por factores externos y nace de ellos la licuación de los espacios públicos y los valores, enfrentando así una nueva competencia. Y en nuestra historia esto lo hemos vivido. La competencia con los políticos históricamente estuvo

dada por el poder militar y también por la hegemonía que en algún momento tuvo el poder sindical en la República. Hoy esas dos grandes fuerzas están sustituidas por el poder mediático y el de las grandes corporaciones, que se da en llamar el poder del mercado.

Entonces, estamos jaqueados por estos poderes. Y muchas de las cosas que vamos a hacer es porque sentimos la extorsión y el apremio que nos viene de afuera. No estoy diciendo que no cometamos errores ni que no tengamos corruptos entre nosotros, porque eso sería una utopía, pero la actividad que desempeñamos y la vocación que seguimos es la más noble de las profesiones; lo dijo un papa de la Iglesia católica. No arruguemos frente a eso.

Fíjese la cuestión de los medios. Voy a citar algunas cosas que escribí en otro momento. “Algunos autores hablan de una soberanía construida por los medios. Esta subordinación de la política a los medios genera no sólo una despolitización sino que fomenta el desprestigio y descrédito de la política.”

Guillermo O'Donnell se ha ocupado también de este tema y nos ha hablado de lo que se llama la democracia delegativa, es decir que en algún momento elegimos un gobierno y después nos desentendemos de lo que sucede. Se cumplen los requisitos formales, pero la gente se desentiende de la política, delegando el poder en los gobernantes al votar. Este déficit es lo que altera la calidad de la democracia.

Otro autor, Ludolfo Paramio, dice: “...la gente cada vez le cree menos a los políticos —novedad—. Esto es parte de un proceso más amplio denominado desafección política, que implica que los ciudadanos perciben que la política no puede afectar positivamente su vida y a la inversa, ellos no pueden afectar a la política. Esta delegación o desafección se manifiesta en la caída del nivel de afiliación política, en la creciente volatilidad y fragmentación del sufragio, en la abstención e indecisión, en el descrédito de los ciudadanos en los políticos y la eficacia de las políticas y en un electorado más racional e independiente”.

Para Panebianco, otro autor, “...la causa de la crisis de los sistemas de representación política no es sólo de institucionalidad y de cultura política caudillista sino que es principalmente el resultado del cambio en la matriz socioeconómica”. Es cierto.

Durante el Estado de bienestar, la gente podía observar que el político podía influir en su vida, porque manejaba un Estado poderoso. Entonces, el político era un intermediario válido y eficaz de sus necesidades frente al gobierno. Pero hoy que el Estado se ha reducido y tiende a hacerlo cada vez más, qué oportunidades e influencias puede tener un intermediario—como de alguna manera es el político— para que la gente mejore su situación personal, familiar, de barrio o de ciudad. Es decir, con la crisis del Estado también se ha reforzado la de la política. Eso es lo que estamos debatiendo.

No me parece oportuno reflexionar sobre el grado de ridiculización a que las versiones mediáticas llevan el rol y las actividades de los políticos, especialmente en los programas de televisión y aun en los sainetes teatrales.

Esto me causa una gran pena, porque yo—como muchos de los que estamos acá— he asistido a la comicidad en política y ninguno de nosotros olvida que ha habido un Pepe Arias o un Tato Bores haciendo humorismo, pero ésa era una tarea inteligente, superior. Podíamos reír y al mismo tiempo sentirnos criticados, pero nunca insultados o humillados, tal como ocurre ahora, debido a la forma grosera e impúdica con que algunos cómicos de la televisión tratan a los hombres de la política. Pero frente a eso no tenemos defensa.

Cuidado de nosotros si nos atreviéramos a decir que hay que poner algún límite moral a estos sucesos. Inmediatamente seríamos crucificados por ser opositores a la libertad de prensa; derecho este que nosotros hemos consagrado con nuestro voto y que hemos fortalecido con la reforma constitucional.

Más aún, después llegan los tremendistas. Hay una señora que se llama Carlota Jackish que ha escrito: “Política. El gasto del aparato estatal y provincial está calculado en unos veinte mil millones de pesos anuales”. Lo escribió en el diario “La Nación”. Este importe alcanzaría para pagar la deuda pública. Bastaría suprimir los ocho mil funcionarios políticos—de los que habla esta señora—, que gastan veinte mil millones de dólares.

Y este dato, que está registrado en la primera página de un diario importante y serio como es “La Nación”, sirve para apreciar hasta dónde se llega con esto de denostar la política y a quienes la ejercemos.

No son veinte mil millones de dólares; es mucho menos que la décima parte de eso. Porque esta señora ni siquiera se anima a dar la cifra. Dice que Rosendo Fraga le dio el dato. Sin embargo, yo lo llamé esta tarde a Rosendo Fraga, le pregunté si había dicho en algún lado que el gasto de la política son veinte mil millones de pesos anuales y me contestó que jamás había dicho eso.

Mis cálculos indican una cifra menor, de alrededor del 10 por ciento. Pero esto sale publicado en los diarios. ¿Lo desmentirá la señora Jackish? ¿Saldrá desmentido esto en las páginas del diario “La Nación”? ¡Jamás! Pero imagino cuántos ciudadanos dirán “bastaría con suprimir a los políticos para que tuviéramos para pagar la deuda”. Porque eso también lo dice esta señora que sigue dando conferencias...

—El texto del informe del doctor Rosendo Fraga, al que hizo alusión el señor senador Cafiero, es el siguiente: “El costo de la política. No es fácil hacer un cálculo sobre el costo de la política. Para una aproximación, se puede tomar la estructura de cargos electivos que en la Argentina alcanza a 16.508 cargos. De ellos, el 2 por ciento son nacionales, el 8 por ciento provinciales y el 90 por ciento municipales.

“Un cálculo aproximado puede partir de que hay cinco personas, en promedio, trabajando en el sector público por cada cargo electivo. Ello implicaría un total de 99.048 personas que trabajan en el sector público en función de la estructura política. Entre ese personal se encuentran los tan mentados ‘ñoquis’.

“Teniendo en cuenta el promedio salarial que cobran los legisladores y su personal a cargo—secretarios, auxiliares, ayudantes, etcétera— puede estimarse en un total de salarios de aproximadamente dos mil millones de dólares al año. Esa cifra equivale aproximadamente al 2,4 por ciento del gasto público total, incluyendo el gasto público nacional, provincial y municipal. Este sería el costo salarial que implica para el Estado el sostenimiento de la estructura político-electiva.

“Frente al costo que implica pagar uno o dos pesos por voto para financiar los partidos—podríamos hablar en este caso de 10 o 20 millones al año” es evidente que el costo salarial es muchísimo más alto. Un cálculo aproximado muestra que las campañas presidenciales de los partidos mayoritarios, de acuerdo a las cifras de 1999, pueden haber implicado un costo de en-

tre 120 y 150 millones de pesos. Un cálculo aproximado sobre el costo de las campañas legislativas realizadas al margen de la elección presidencial y de las internas puede alcanzar entre 50 y 60 millones más.

"Es decir que las cifras que se gastan en campañas son aproximadamente el 10 por ciento del costo salarial, y el costo estatal directo del Estado para sostener los partidos es de aproximadamente el 1 por ciento del costo salarial estatal.

"En general, este número, como porcentaje del producto bruto interno o como porcentaje del presupuesto nacional, es menor al del promedio de los países desarrollados, sin que pueda realizarse una comparación consistente con un promedio de los países de América latina, aunque claramente es superior a Chile y Uruguay".

Sr. López. – Solicito una interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente (Sapag). – ¿Autoriza la interrupción, señor senador?

Sr. Cafiero. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Sapag). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. López. – Señor presidente: aprovecho que el señor está haciendo referencia a los números de la política para decir que hemos hecho un pequeño trabajo sobre los gastos que ella insume en el Poder Ejecutivo, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en la Biblioteca del Congreso, en la Imprenta del Congreso, en la Dirección de Ayuda Social y en la Subsecretaría General de la Defensoría del Pueblo; y creo que dentro de unos instantes tendré los porcentajes. La cifra es de 486 millones de pesos. O sea que 20.000 millones de pesos es un disparate; y en algún momento hay que aclarar esto.

Aquí tengo el cuadro a disposición de quien lo quiera consultar. La cifra en el Senado de la Nación es de 138 millones y en la Cámara de Diputados es de 194 millones; en el Ministerio del Interior, referido el dato a los órganos que están específicamente vinculados a la política, es de 97 millones. En definitiva, el total ronda los 486 o 500 millones, es decir que no llega al 1 por ciento del presupuesto nacional, que es de 50.000 o 60.000 millones de pesos.

Por lo tanto, esto que se ha estado diciendo, y se repite por los comunicadores sociales, es una gran mentira que conviene aclarar.

Yo iba a solicitar la palabra para señalar esto, pero después quise esperar a que alguien haga referencia a esos 20.000 millones de pesos, para poder decir lo que es real, lo que está en el presupuesto.

Aquí tengo el cuadro comparativo y, seguramente, dentro de unos instantes tendré el porcentaje de lo que significa el gasto en cada jurisdicción.

Tal vez, se pueda escapar algún contratado, pero en el diario "La Nación" de hoy apareció publicado el gasto que insume la política en las provincias y los municipios y las cifras son de 1.012 y 849 millones, respectivamente.

Es decir que si a la cifra que señalé en un principio le sumamos incluso los gastos de todas las jurisdicciones provinciales, no llegaríamos a más de 2.500 millones de pesos. Por lo tanto, los 20.000 millones de pesos es realmente una falsedad.

Ayer, en una reunión del bloque de la Unión Cívica Radical le hemos pedido al ministro del Interior que haga la sumatoria de los gastos de la política, para que se aclare esta situación a la opinión pública y no tengamos que soportar todo esto.

Los 20.000 millones de pesos prácticamente alcanzarían para cubrir todas las necesidades: hospitales, empleo y todo lo que la gente está reclamando, pero ése no es realmente el gasto de la política sino que es muy inferior. Reconocemos que hay excesos y que podemos reducirlo, pero no debemos admitir cifras que no son acordes con la realidad.

Sr. Gioja. – Solicito una interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente (Sapag). – ¿Autoriza otra interrupción, señor senador?

Sr. Cafiero. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Sapag). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. – Señor presidente: la pregunta que viene a continuación, y me gustaría hacérsela a la periodista que mencionó el señor senador Cafiero, es la siguiente: ¿en la época de los gobiernos militares, cuánto se gastaba en la política y cuál fue la consecuencia?

Sr. Presidente (Sapag). – No se animaron a publicarlo.

Sr. Corach. – Solicito una interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente (Sapag). – ¿Autoriza otra interrupción, señor senador?

Sr. Cafiero. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Sapag). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Corach.

Sr. Corach. – Señor presidente: quiero aportar los datos del Ministerio del Interior, que fueron calculados sobre el gasto legislativo provincial que tanto fue meneado en estos últimos meses.

No sé si ustedes tienen un cuadro en el cual se establece el gasto provincia por provincia, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que indica que el total de estos distritos es de 35.000 millones de pesos y el gasto legislativo –Legislatura por Legislatura–, es de 798 millones de pesos.

Sr. Cafiero. – ¿Qué son los 35.000 millones?

Sr. Corach. – Dije que el gasto presupuestario de todas las Legislaturas del país es de 798 millones de pesos.

Sr. Cafiero. – No; me refiero a los 35.000 millones de pesos...

Sr. Corach. – La cifra de 35 mil millones corresponde al nivel de gasto presupuestado para todas provincias.

Sr. López. – Pero esos 35 mil millones no son para gastos de la política.

Sr. Corach. – No, no, no.

Sr. López. – Claro, pero habría que decir que se trata de gastos en obras, asistencia social, etcétera.

Sr. Corach. – De hecho, el presupuesto de gastos de las Legislaturas provinciales, que ha producido un escandalete en todo los medios de comunicación, es de 798 millones de pesos.

Sr. Sager. – ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Sapag). – Senador Cafiero: le solicitan otra interrupción.

Sr. Cafiero. – Cómo no, señor presidente.

Sr. Presidente (Sapag). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sager.

Sr. Sager. – Señor presidente: si nosotros vamos a hacer de este asunto un cotejo de cifras, podemos caer en el error de suponer que la gente nos va a entender; estaríamos creyendo que mostrando un monto menor justificaríamos la actividad política.

En lo personal, considero que la gente está esperando otra cosa. Independientemente de aprobar estos proyectos, que considero absolu-

tamente beneficiosos y esperados, creo que la gente modificará su visión de la política y dejará de considerarla un gasto innecesario si los distintos gobiernos –llámense nacionales, provinciales o municipales– muestran con sus actitudes la intención de buscar las soluciones que el pueblo hoy no encuentra en ellos.

La desesperanza que siente la gente cuando estos mercaderes de las cifras publican en la tapa de una revista o en los titulares de un diario ciertas noticias que involucran a los protagonistas de la política, quedará definitivamente de lado si comenzamos a encontrar el rumbo.

Después de la aprobación en general y en particular de estos proyectos creo que todos –principalmente quienes integramos esta Cámara– nos debemos un debate acerca de para qué vamos a utilizar la política.

A mi juicio, independientemente de coincidir con los conceptos vertidos por muchos de los senadores que me precedieron en el uso de la palabra –fundamentalmente los manifestados en primera instancia por el senador Molinari Romero–, creo que éste es el debate que la gente está esperando de nosotros.

En 1993, en mi provincia ya se ha hablaba de la reforma constitucional. Yo era intendente municipal y escuchaba de parte de algunos comunicadores sociales este mensaje que hoy se repite sobre los concejos municipales. Sin embargo, difícilmente el vecino de un barrio pueda acceder a discutir su problemática si no es a través de un concejal.

Entonces, cuidado con subirnros a esta discusión, con no debatir en profundidad y con no comunicar bien a la gente

Creo que actualmente, como planteaba hoy el señor senador Cafiero, la comunicación no sólo se debe hacer a través de los medios de difusión. La gente está esperando que los políticos digamos estas cosas cara a cara. Como decía el senador Cafiero, algunos han modificado ese escenario y se han olvidado de nuestros orígenes. Por lo tanto, entiendo que debemos volver a esa modalidad, es decir, a la transmisión casi personal de nuestras ideas y, entonces, esto que hoy estamos discutiendo aquí será mejor entendido. Porque no debe haber la menor duda de que las cifras que estamos tratando de justificar, mañana serán tergiversadas, ya que existe un interés superior al que estamos defendiendo aquí.

Sr. Presidente (Sapag). — Voy a hacer algo totalmente inusual.

Solicito permiso a la Cámara para interrumpir al senador Cafiero.

—Asentimiento.

Sr. Cafiero. — Cómo no, señor presidente.

Sr. Presidente (Sapag). — Fuera de todo lo que estamos hablando con respecto al gasto de la política, quisiera comentar lo siguiente.

En un programa de diversión, un periodista que fue acreedor a un Martín Fierro se dio el lujo de decir que Cavallo había venido a esta Cámara a solicitar las leyes que él pedía a cambio de beneficios judiciales para los senadores.

Entonces, uno se pone a pensar que si no se trata del gasto de la política, el tema será que somos unos “tránsfugas”, que estamos pidiendo perdón judicial para aprobar algunas leyes: si no, seremos asaltantes de bancos o lo que se les ocurra decir. Sostener que el ministro Cavallo vino aquí a cambiar leyes por beneficios judiciales es una aberración tan grande, que es imposible de aceptar. Hoy le escribí una carta y envié otra al programa.

¿Y para qué sirve? Si los únicos que se han sacado los privilegios fuimos nosotros; nadie más lo hizo. No tenemos ningún derecho a hacer reclamo alguno ni tenemos el espacio de que ellos disponen para hacerlo. Gracias por la interrupción.

Sr. Cafiero. — Voy a rematar. (*Risas.*)

¡Vaya que hemos creado, por lo menos, el interés por el tema! No lo vamos a resolver ahora y tal vez no podamos hacerlo nunca. Pero lo que ha dicho el senador por el Chaco me compromete —y creo que a todos—; por lo tanto, tenemos que seguir con estos debates.

En algún momento esta Cámara tendrá que debatir los aspectos más reglamentaristas —diría yo— y hasta administrativistas y burocráticos que están contenidos en los cuatro proyectos de ley que vamos a tener que analizar. Digo esto porque la crisis de la política va mucho más allá del porcentaje o de la cantidad de dinero del que se puede disponer para una campaña electoral o de la duración que ésta puede tener. Tampoco se interpreten mis palabras como un *bill* de indemnidad o de impunidad a las necesarias reformas que tenemos que imprimir a nuestra actividad. Eso sería un pecado tan grave como

caer en la crítica fácil y en la desvirtuación de la realidad para fundar supuestos que no tienen, seguramente, ningún asidero.

Entonces, señor presidente, creo que este debate que hoy hemos iniciado tiene que ser el comienzo. La crisis de la política es también la crisis de una sociedad en su conjunto. No asumamos nosotros toda la responsabilidad por fenómenos culturales y éticos que se vienen dando en la humanidad como consecuencia de cambios globales que nos afectan a todos.

La sociedad ha perdido dinamismo ético y convicción moral —lo dicen los pensadores más importantes de este tiempo—, y eso no se traduce solamente en la política, sino también en muchas actividades y aspectos de la vida humana.

Para terminar con lo político, debo decir que esta suerte de ejercicio de denostar a la política y a los políticos, esta actitud de querer ver en las remuneraciones de los políticos la causa de la crisis económica, nos va a llevar a lo que dice el escritor James Neilson en el periódico “Página 12” en su edición de hoy. Neilson hace el siguiente comentario: “Tal como están las cosas, pronto vendrá el día en que todos los políticos tengan que trabajar ad honórem y, con miras a poner fin a la corrupción, les será exigido prometer solemnemente conformarse con una jubilación mínima después.

”Si esto ocurre, el país no tardará en verse frente a un déficit político insólito...”, porque no habrá quienes quieran desempeñar los cargos políticos.

Y continúa más adelante: “...si hurgamos en la historia de la democracia encontraremos una solución práctica para este problema: como los atenienses en su época de mayor esplendor, se pueden elegir a los políticos al azar (por sorteo) para entonces obligar a los que hayan tenido la mala suerte de ser convocados a cumplir con su deber amenazándolos con la cárcel, cuando no con la pena de muerte, en el caso de que rehúsen servir a la patria en el lugar que les sea indicado (por sorteo). Es lo que hacen los ejércitos cuando los voluntarios escasean, si a nadie le interesa una profesión tan despreciada y tan mal remunerada como será la política de mañana, será necesario llenar las Cámaras del mismo modo.”

Esta es una fantasía, obviamente, pero de cualquier manera no deja de poner en relieve el camino al cual puede conducirnos esta sistemática degradación de la vida política.

Antes de terminar debo manifestar que, con respecto a los proyectos concretos en consideración, tengo algunas observaciones que formular, que voy a repetir cuando tratemos en particular estas iniciativas.

No estoy de acuerdo con que no se legisle sobre las denominadas listas sábana. Sobre el particular adhiero al proyecto que en su momento formuló el Ministerio del Interior que dirigía el entonces ministro Corach, hoy colega nuestro. Creo que debemos abrir los marcos de la representatividad para que no pase solamente por las directivas partidarias.

Nuestra legislación debe admitir las candidaturas independientes; eso fue lo que votamos en la Convención Constituyente después de un áspero debate. Los partidos políticos no deben monopolizar la representación, que también debe estar abierta a candidaturas independientes. Esto es lo que dice la Constitución; léasela bien, señor presidente. Sin embargo, la iniciativa que tenemos bajo nuestra consideración elimina la posibilidad de candidaturas independientes.

El tercer aspecto que me gustaría ver plasmado en la ley es un énfasis mayor en las funciones de capacitación de sus dirigentes que deben desarrollar los partidos políticos. Si bien es cierto que hay una norma que dice que se deberá destinar por lo menos el 20 por ciento del gasto político a tareas de capacitación, esto no asegura que esas tareas se desarrollen con la profundidad y el vigor que exige la vida moderna.

Hoy se capacitan todos: los empresarios, los sindicalistas, los profesores y los maestros. Sabemos que el poder nace del conocimiento y cada día más el nivel de conocimiento, instrucción y educación que tiene una persona es el que define su calidad de vida. Entonces, aumentemos y reforcemos la tarea pedagógica de los partidos políticos. Voy a proponer en su momento, en ocasión del tratamiento en particular, una cláusula para facilitar y profundizar esta que considero una de las tareas más fundamentales de un partido político.

En su momento, voy a proponer estas tres modificaciones con ánimo de enfrentar otra de las realidades que tenemos, que plantea el siguiente interrogante: ¿para ser buen político hay que tener la fortuna de Berlusconi? Es la última pregunta que me hago.

Sr. Presidente (Sapag). – Tiene la palabra el señor senador por la Ciudad de Buenos Aires.

Sr. Corach. – Señor presidente: participo de este debate con la convicción de que estamos dando un paso importante en el rediseño del sistema político argentino, porque creo que la sociedad política debe asumir la responsabilidad de lo que nos está ocurriendo. Hemos sido nosotros, predominantemente, quienes diseñamos por acción u omisión la situación que estamos viviendo.

No es casual, señor presidente, el desprestigio que corroe actualmente la voluntad política de los argentinos. Y digo que no es casual porque muchas veces, en distintas circunstancias de nuestra historia contemporánea, hemos contribuido por acción u omisión a la destrucción de las figuras públicas de la Argentina. Esto no es nuevo y que nadie se sorprenda por ello.

No quiero remontarme muy lejos en la historia, pero desde Yrigoyen en adelante las grandes figuras públicas de la Argentina fueron denostadas, agraviadas, desprestigiadas y, en algunos casos, forzadas al exilio.

Por ello, creo que este debate en general debe servirnos para tomar en las manos por lo menos la historia que hemos vivido, y con una mano en el corazón debemos preguntarnos qué hemos hecho para que lo que fue un orgullo para otras generaciones de argentinos hoy sea una pesada carga de la que algunos no saben cómo salir.

Sé que lo que vamos a hacer no satisface los reclamos que a través de los medios de comunicación nos formula la sociedad. Y tampoco es casual que una de las crisis económicas más graves que vivió nuestra República –como es ésta– vaya acompañada de lo que no dudo en calificar como la más grave crisis política de los últimos cincuenta años de vida nacional, descartando por supuesto los quiebres del orden constitucional que, afortunadamente, son cosas del pasado.

Recuerdo que las consecuencias de cada golpe de Estado hacían después que muchos se preguntaran si habían hecho lo suficiente para que no ocurriera. Aclaro que no quiero que se piense que me estoy refiriendo a algún partido o agrupación política en particular, porque también la nuestra tiene la responsabilidad –quizá de no haber defendido con ahínco en algún momento de la historia el orden constitucional de los argentinos.

Quiero ser objetivo y no quiero moverme por prejuicios ni por preconceptos. En una carta

escrita durante la guerra de Argelia, Albert Camus decía que aquel que en una época de mala fe se resigna a no separar lo verdadero de lo falso sufre una especie de exilio.

Creo que la crisis que estamos viviendo es tan profunda que debemos aferrarnos a la verdad, no a una verdad absoluta o a mi verdad sino a lo que cada uno de nosotros crea que es necesario y beneficioso para los argentinos, sin detenerse —en absoluto— en costos o en beneficios políticos.

Con el orgullo de pertenecer a una bancada que ha dado muestras suficientes de lealtad a la República, ejercitando una oposición responsable y seria, respetuosa y clara, digo que hoy los políticos argentinos debemos hacer un gesto importante, debemos tender la mano a la sociedad, aunque no nos la reciba y quedemos con la mano tendida. Pero hay que hacer algo, hay que señalar caminos.

Se me ocurría decir hace unos instantes que mientras dure la crisis económica hay que declarar la emergencia política que nos permita hacer sacrificios personales, que quizá no sean significativos en el conjunto de los grandes números, pero que sí lo serán en la conciencia de millones de argentinos que padecen privación. Y esto no es demagogia. Es un intento, digamos apasionado, de volver al seno de nuestra sociedad y tratar de recibir el impulso necesario para que los políticos puedan superar esta terrible crisis que vivimos, que no sólo es política sino también económica y social.

Al respecto, quiero destacar el acompañamiento de la bancada oficialista, de la Alianza.

Los proyectos en consideración son el fruto no sólo de largos trabajos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tan sabiamente preside el compañero Jorge Yoma, sino también de otra gran labor llevada a cabo durante muchos años, porque desde el retorno de la democracia se habla de la reforma política.

Recuerdo que el Consejo de Consolidación de la Democracia, puesto en marcha durante la época del presidente Alfonsín, trabajó en estos temas. También se trabajó en ellos durante la presidencia del doctor Menem, al punto que desde 1995 insistimos incansablemente en la cuestión. Presentamos proyectos en 1997, 1998 y 1999, mediante los cuales tratamos de llamar la atención sobre estos temas porque sabíamos que iban a ser candentes en algún momento más próximo que lejano.

Por eso, señor presidente, con la mayor brevedad posible quiero decir que muchos ojos nos miran; muchos argentinos miran lo que pasa hoy en este Senado. Seguramente, la mayoría de ellos lo hace sin esperanzas. Pero de lo que hagamos nosotros depende que se empiece a recuperar la credibilidad y la confianza.

No estamos frente a la reforma óptima, pero es aquella a la que se llegó con el consenso del Poder Ejecutivo nacional a través de la gestión de los ministros Storani y Mestre.

No es la reforma del gobierno, de la oposición ni de ningún legislador. Es la reforma de todos, porque los sinnúmeros proyectos que existen sobre este tema han sido en su gran mayoría contemplados, y sus autores consultados.

Por eso quiero exhortar a que demos el más breve tratamiento posible antes de la votación en general. Cuanto más rápido votemos, será mejor.

No permitamos que fracase esta sesión. Hagamos todos los esfuerzos para que este tema hoy se pueda aprobar en general. Y luego, en particular, discutamos con dedicación y hagamos las modificaciones que creamos necesarias.

Pero hoy tenemos que aprobar los cuatro dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. Presidente (Sapag). — Tiene la palabra el señor senador Del Piero.

Sr. Del Piero. — Señor presidente: voy a ser muy breve, porque coincido con el señor senador Corach en que es necesario que esta noche aprobemos en general los cuatro dictámenes que están en tratamiento sobre la reforma política.

Voy a hacer unas muy breves consideraciones para destacar la importancia de lo que estamos considerando, que no es poco. Puede parecerlo porque la demanda sobre la dirigencia política es muy grande. Aquí ya se ha descrito esta cuestión; no me voy a reiterar.

Digo que no es poco lo que estamos considerando, porque vamos a aprobar el dinero para los partidos políticos y para las campañas políticas.

Vamos a votar limitaciones y controles muy importantes a dos hechos que dan nacimiento a la representación institucional que los políticos invertimos: a la elección y a la vida partidaria, con las consecuencias que esto conlleva.

La elección es el momento en donde la voluntad del político suele perder independencia. Por eso es tan importante lo que vamos a votar esta noche.

Todos conocemos las historias de la política argentina a partir de compromisos tomados y de cuantiosos gastos de campañas electorales, que después tienen que compensarse en el momento de tomar decisiones.

El otro aspecto que me parece fundamental es el tema de las internas abiertas. Esto significa favorecer y permitir una intervención previa del electorado en lo atinente a las fórmulas de presidente y vicepresidente de la Nación.

Todos sabemos que los partidos, a lo largo del tiempo, a medida que se van estableciendo sus burocracias, formas de funcionamiento, núcleos de trabajo y fracciones internas, van adquiriendo modos de control de la vida partidaria y formas de control en la selección de candidatos.

Creo que las internas abiertas van a mejorar sensiblemente el control de los partidos políticos, que la gran mayoría de las veces se hace a partir de buena voluntad, aunque también en otras, desde el anquilosamiento de la vida partidaria, sobre todo cuando las internas dentro de los partidos se convierten en más importantes que las elecciones externas.

Considero que las internas abiertas van a oxigenar y a permitir una intervención previa de la ciudadanía en la preselección de las fórmulas que después van a ir a la elección general.

Personalmente deseo, y lo voy a proponer en el tratamiento en particular, que haya internas abiertas simultáneas para todos los partidos. ¿Por qué? Porque considero que sería un acto de movilización ciudadana masiva muchísimo más importante e impactante, que permitiría, además, resolver algunas situaciones muy particulares, como ser la de que un ciudadano vote solamente por las internas de un solo partido.

Me sumo también a algunas apreciaciones, formuladas con respecto a ciertos números y economías que, en muchos casos, sólo reflejan un golpe de impacto, por cuanto se hacen simplemente en función del número. ¿Por qué hay que dividir por la mitad la cantidad de legisladores? ¿Por qué no por diez o por cuatro?

En ese sentido, quiero puntualizar que no se trata de un problema de cantidad, sino de calidad, de eficiencia. Creo que el problema grave que tenemos es que gastamos mal, además de que en algunos casos probablemente gastamos mucho.

dir nuestro desempeño. Entonces, quizá lo que se gasta puede ser mucho si no se hace nada y, aunque se gaste la mitad, podrá seguir siéndolo si se continúa sin hacer nada. También puede suceder que se haga mucho y se consigan resultados positivos gastando lo que corresponda.

Por eso hago un llamamiento para que a este camino que hoy iniciamos a través de estos primeros proyectos de reforma le agreguemos parámetros de eficiencia, a la vez que nos comprometamos a ponernos a disposición de la sociedad. Hoy no sirve pelearse con los medios de comunicación. El problema es que nosotros estamos incomunicados con la sociedad. Si establecemos estas reglas de juego y exponemos en Internet los gastos de este Senado, como lo venimos pidiendo desde hace ya más de tres años —lo pedimos en 1998—, las cosas podrían ser distintas. Estoy seguro de que si se hubiera hecho esto, no sólo habríamos logrado ahorros, sino que hoy nadie podría criticar al Senado por no saber ni siquiera cómo se gasta, toda vez que se sabe cuánto se gasta.

Por último, en tren de...

Sr. Villarroel. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Del Piero. — Señor presidente: no voy a conceder interrupciones...

Sr. Yoma. — Son del mismo bloque, senador...

Sr. Del Piero. — ...quiero terminar mi exposición lo más rápidamente posible, para que podamos pasar a la votación.

Si lanzamos nuestra imaginación a volar, como hizo el señor miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales con su ejemplo relativo a los diputados, también podríamos repensar o someter a debate el sistema federal argentino. También podríamos pensar en una Argentina mucho más moderna, representada por regiones en términos federales y que opere en función de una modernidad diferente y no sobre la base de una matriz institucional que ya tiene más de 150 años.

Propongo esta cuestión como tercer escalón de debate, en el mismo sentido que el señor senador Yoma planteó al principio de su exposición la posibilidad de reducir el número de miembros de la Cámara de Diputados. En ese sentido imagino, por ejemplo, siete regiones con cinco senadores, y una Cámara de 35 senadores. Se trata, simplemente, de una propuesta para debatir oportunamente.

Sr. Presidente (Sapag). – Tiene la palabra el señor senador Torino.

Señor senador Villarroel: usted había solicitado una interrupción. ¿Desea hacer uso de la palabra ahora?

Sr. Villarroel. – Sí, señor presidente.

Agradezco al señor senador por San Luis que me brinde la oportunidad de expresarme ahora, aunque quizá mi intervención sea extemporánea, por cuanto ya se ha formulado el discurso en el que quería hacer una acotación. De todas maneras, como tengo la oportunidad, la voy a expresar.

No es el momento oportuno y sería un abuso de mi parte intentar ahora efectuar un análisis de las causas del desprestigio de la actividad política. Al respecto hemos escuchado discursos muy interesantes. Por eso voy a ir a lo concreto.

Me parece que no ha ayudado en nada al prestigio de la institución Senado el hecho de que quien fuera presidente de este cuerpo, elegido por la voluntad popular, haya manifestado que no le era posible saber cuánto cobraba cada senador. Así de sencillo.

Me parece que tampoco contribuyó a eso el hecho de que esa misma ex autoridad de esta casa haya dicho que una de las medidas de adcentamiento de la vida parlamentaria fue quitarnos a los senadores nuestro presunto derecho a comer gratis en el Senado. Llevo más de ocho años aquí y nunca almorcé gratis, salvo cuando me invitó algún colega. Estas cosas parecen nimias, pero son las cosas que se difunden por los medios de comunicación.

Sr. Presidente (Sapag). – Tiene la palabra el señor senador Torino.

Sr. Torino. – Señor presidente: no quiero extenderme demasiado en mi alocución con el fin de priorizar que se vote en general el tema en consideración.

Como senador integrante del bloque Justicialista por el Cambio quiero expresar que apoyo totalmente esta reforma política necesaria que la sociedad hoy está demandando. En ese sentido vamos a propiciar que se aprueben los cuatro dictámenes de comisión que se han emitido porque creemos que la comunidad está esperando un cambio profundo. Tal vez esta crisis sea la oportunidad para hacer un cambio de ese tipo en lo que hace a la calidad, a fin de pasar de una democracia representativa a una parti-

cipativa y realmente consolidada. A esos efectos, solicito que se inserte mi discurso en el Diario de Sesiones. De todas formas, quiero hacer una pequeña reflexión en general y señalar mis diferencias en particular, las que detallaré cuando se realice el tratamiento pertinente.

Mis colegas preopinantes han realizado una aguda reflexión referente a la situación por la que está atravesando la clase política, que tal vez sea producto de la crisis económica y social que está soportando el país. Y en esta crisis que hoy soporta el país, probablemente la clase política sea la parte más fina por donde se tiene que cortar el hilo.

Considero que en un sistema democrático no podemos renegar de la vocación de servicio que encierra la tarea política. Debemos consolidar y mejorar esta actividad, generando las reformas que hagan a su perfeccionamiento. Pero de ninguna manera debemos buscar la destrucción de la clase política, porque ello sería la destrucción del sistema democrático.

En este tema –que no voy a profundizar para no generar un debate– hay muchos responsables. De todos modos entiendo que el gobierno debe tener el suficiente tino como para conducir los graves momentos por los que está pasando la Argentina, que se dice que está técnicamente en cesación de pagos debido a que desde hace varios días la tasa de riesgo supera los mil puntos. En efecto, estamos atravesando un momento crucial en el que, tal como manifestaron los gobernadores, habría un inicio de rebelión fiscal y un estado de conflicto social muy agudizado.

En esta situación considero que de ninguna manera pueden producirse manifestaciones como las de Lautaro García Batallán, viceministro del Interior, quien dijo lo siguiente: “Yo formo parte de uno de los grupos que el Presidente ha puesto a pensar en esto. (...) El grupo trosko, diría yo”. Me parece que no es lo más apropiado para autodenominarse como grupo, ¿no?

En otra parte de su artículo dice: “Hay que ponerle una bomba al sistema” político. Lo que dice es gravísimo, porque poner una bomba significa dar un salto al vacío, sobre todo en momentos como el que estamos viviendo. Pero más grave todavía para quienes representamos los intereses de las provincias y el federalismo es cuando dice: “Eliminar todos los concejos deliberantes (...) y reemplazarlos por pequeños equipos de auditores (...) establecer Legislaturas

unicamerales en las provincias o, ¿por qué no?, Legislaturas por regiones...". Acá es donde se ataca —cosa que no vamos a permitir— las autonomías de las provincias.

Desde San Luis nos hemos opuesto permanentemente a la regionalización porque son las provincias las que hicieron el país y existieron antes que la Nación.

Por eso considero que esto no le hace bien al sistema político actual y que los responsables de llevar a cabo la reforma política no contribuyen con este tipo de declaraciones. Menos contribuye —como decía recién el señor senador preopinante— el ex vicepresidente con todo lo que ha dicho y con la "Carta a los argentinos", que no me voy a detener a leer.

Esta situación es la que hoy está generando el desgaste y la crisis política. Por ello, tenemos que actuar con la madurez suficiente para buscar las soluciones y tender una mano a la comunidad, al pueblo, como recién decía el senador Corach.

Quienes ostentamos la representación en este Parlamento tenemos la oportunidad de buscar esas soluciones. Considero que en el proyecto que hoy estamos discutiendo tienen que eliminarse las "listas sábana". Eso garantizará una genuina representación y permitirá que el ciudadano elija con nombre y apellido a sus representantes, y no a una lista completa donde a veces va sumada gente que no es la más representativa y a la que, tal vez, algunos no quieren votar.

También debemos profundizar todo lo vinculado con la transparencia y el sostenimiento del patrimonio de los partidos políticos. Si bien esta cuestión está expresamente contemplada en el dictamen de comisión, tal vez haga falta una profundización en el contralor del origen y el destino de los recursos para manejar las campañas electorales.

Otro tema importante es la participación ciudadana desde la génesis de la conformación de los candidatos que nos van a representar y que después tienen que votar. Me refiero a que las elecciones sean abiertas, no solamente para presidente y vicepresidente de la Nación sino para todos los cargos electivos. Pero avanzo aún más y llego a la célula fundamental y vital de la democracia: los partidos políticos. En este caso también las internas deben ser abiertas para que se puedan elegir los cargos partidarios, res-

Sr. Angeloz. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Torino. — Sí, señor senador.

Sr. Presidente (Sapag). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Angeloz. — Con todo respeto creo que las elecciones abiertas en los partidos políticos para elegir a sus autoridades es una aberración. El señor senador ha propuesto la posibilidad de que en internas abiertas se elijan a las autoridades partidarias. Esto responde a los afiliados, esto responde a quienes tenemos vocación por la vida política de los partidos; pero, de ninguna manera, un ausente de la vida política de nuestros partidos puede venir a votar por un presidente de mi partido.

Sr. Presidente (Sapag). — Continúa con el uso de la palabra el señor senador Torino.

Sr. Torino. — Con todo respeto contesto al señor senador Angeloz que no creo que el sistema actual de afiliaciones —que es el que permite votar en el partido— sea el que le garantice la igualdad de posibilidades de participación, porque esto es voluntario.

Digo esto porque en el Partido Justicialista de San Luis, del cual soy vicepresidente, hemos instrumentado a través del Congreso Partidario —y ahora lo estamos llevando a la práctica— las elecciones abiertas para todos los cargos partidarios con el solo requisito de que quien se presente sea afiliado con una antigüedad de un año. De ahí en más, si el ciudadano independiente lo desea, puede participar en nuestras elecciones y votar.

Por supuesto que también propiciamos —como ya se ha realizado— las elecciones abiertas para todos los cargos electivos a nivel provincial. Por su parte, utilizaremos un sistema uninominal en lo que hace al nivel partidario.

Lo que estoy diciendo es lo que sucede dentro de un partido político de jurisdicción provincial, que hace a una nueva etapa que vive la democracia, en la cual tenemos que propiciar la participación de la sociedad civil.

Por eso, con todo respeto, hago esta propuesta de internas abiertas llegando aun hasta el nivel partidario.

Sr. García Arecha. — Solicito una interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente (Sapag). – Señor senador Torino: le solicitan una interrupción; ¿la concede?

Sr. Torino. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Sapag). – Tiene la palabra el señor senador García Arecha.

Sr. García Arecha. – Señor presidente: dado que cuando ingresé en el recinto ya había comenzado su discurso el señor senador por San Luis, no escuché qué dijo con respecto a la cláusula que señala que el presidente y el vicepresidente serán elegidos en internas abiertas. Cuando el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales hizo su fundamentación, manifesté mi posición sobre la incorporación de los senadores y diputados nacionales. Por eso quería saber si el señor senador por San Luis coincide en que también los legisladores nacionales tendrían que surgir de elecciones internas abiertas, por supuesto respecto de los partidos con personería nacional, que es a quienes puede abarcar la ley.

Sr. Presidente (Sapag). – Continúa con el uso de la palabra el señor senador Torino.

Sr. Torino. – Sí, me refiero a todos los cargos electivos.

Sr. García Arecha. – ¿De diputados y senadores nacionales?

Sr. Torino. – Sí.

También creo que debemos profundizar el análisis del costo de la burocracia política. Creo que éste es un tema sobre el cual se ha hablado bastante y, como se dijo aquí, se han mencionado cifras disparatadas que no tienen nada que ver con la realidad. Creo que el 2, 3 o 4 por ciento no es significativo en el gasto total del Estado y del país. Quizá sea necesario generar un debate en ese sentido sobre la base del presupuesto de gastos vinculados con los cargos políticos, con un porcentaje tal vez mucho menor del que hoy se tiene.

Sin duda uno de los temas que debemos profundizar –coincido con lo que recién decía el señor senador Caffero– es el de la capacitación. Me refiero a la escuela de civismo que debemos tener en cada uno de los partidos políticos, no solamente desde el punto de vista partidario, sino también desde el de la gestión y del liderazgo del Estado.

A su vez, el hecho de que otros candidatos puedan participar es una cuestión bastante compleja que seguramente implicará discusiones

futuras en lo que hace a la calidad y al mejoramiento de la democracia.

Sin duda, creo que en este marco tenemos la oportunidad para trabajar y llevar adelante las grandes reformas que nos está pidiendo la sociedad. Al respecto debo señalar que se han producido distintos documentos sobre este tema. Nuestro Episcopado posiblemente fue un tanto ambiguo, pero hoy ha tenido una posición más clara. Con referencia a los partidos políticos, su crítica ha sido sin duda más profunda al decir en su documento que quizá hoy la patria requiere algo inédito. Ese documento titulado “Hoy la patria requiere algo inédito” aborda todos los temas vinculados a la crisis a los que me referí anteriormente.

Sin duda, ésta es la oportunidad para ver si desde este Parlamento argentino logramos algo inédito que lleve soluciones al pueblo y que satisfaga la demanda de nuestra sociedad en lo que hace a la gran reforma política que debemos llevar a cabo en nuestro sistema democrático argentino.

Sr. Presidente (Sapag). – Tiene la palabra el señor senador Carbonell.

Sr. Gioja. – Señor presidente: ¡llame para que podamos votar!

Sr. Carbonell. – Señor presidente: con la intención de no sobreabundar en este debate tan rico y cargado de tantos conceptos y definiciones en términos legislativos estrictamente vinculados con la labor realizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales respecto de los proyectos presentados, me permitiré resumir sobre qué estamos hablando específicamente.

Nos encontramos con cuatro trabajos sobre los cuales se plantea el inusual método de votarlos individualmente, pero en conjunto, y eventualmente diferir para una próxima sesión el análisis en particular de cada uno de ellos.

Dos de estas iniciativas se motivan en proyectos originados en el Poder Ejecutivo. Se trata concretamente de la modificación del Código Nacional Electoral, ley 19.945, y de la modificación de la denominada Ley Orgánica de los Partidos Políticos, número 23.298. El tercer proyecto, que recibe el título de “Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos”, tiene su origen en diversas iniciativas de senadores nacionales y en un proyecto del Poder Ejecutivo. El cuarto y último, que se concreta en la propuesta de creación de una fiscalía específica vinculada a la

Cámara Electoral Nacional, también se basa en un proyecto promovido por el Poder Ejecutivo.

Me voy a permitir realizar un breve peneo sobre la materia en cuestión. En lo que hace a la reforma del Código Nacional Electoral, la modificación propuesta intenta abocarse a aspectos tales como los términos específicos de la duración de las campañas políticas; a qué se entiende por el uso de los medios masivos de comunicación; a la prohibición o limitación—tanto temporal como conceptual— de que el partido gobernante utilice los actos de gobierno como propaganda para sus candidatos; a la incorporación del uso de este ciertamente nuevo mecanismo de influencia en la opinión pública como son las encuestas efectuadas en los días previos a los comicios y de las famosas encuestas en boca de urna, que se emiten y publicitan a lo largo del día del comicio.

La modificación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos remite básicamente a la propuesta de la introducción taxativa de las internas abiertas para la elección de candidatos.

Creo que la propuesta realizada por el senador por San Luis se basa en una experiencia provincial específica, pero va de suyo que el espíritu de quienes han trabajado en esta iniciativa es reflotar la idea de que por ley las elecciones de candidatos—sean a presidente y vice o, eventualmente, para senadores y diputados—deben hacer por internas abiertas.

Y aquí quiero introducir una duda en función de la letra expresa del artículo 38 de la Constitución Nacional que es el que se refiere a los partidos políticos y les da entidad de sujetos de derecho público. Esa norma se refiere, asimismo, a la libertad de los partidos políticos para definir los modos de elección de sus candidatos.

Traigo aquí este tema para que los señores senadores tengan la chance de reflexionar, a la luz del derecho constitucional y de lo dispuesto en el artículo 38 de nuestra Ley Fundamental—que es un producto de la reforma realizada en 1994—, si la introducción de una norma que, imperativamente, obligue a los partidos políticos a definir sus candidaturas por un determinado método puede rozar o violar aquella libertad consagrada en el artículo que he citado.

Probablemente, el núcleo de la propuesta que estamos analizando sea este proyecto nuevo, que reconoce varias iniciativas de naturaleza

bién un proyecto del Poder Ejecutivo—, vinculadas con la idea del financiamiento de los partidos políticos.

Quisiera hacer referencia ahora a algunos conceptos, como el relativo a la introducción de la cuenta única por distrito...

—Murmulló en el recinto.

Sr. Carbonell. — Sería bueno, señor presidente, que me escuchen los señores senadores. Lamento que el señor presidente del bloque esté distrayendo la atención.

Sr. Presidente (Sapag). — Solicito a los señores senadores que escuchen al orador.

Sr. Carbonell. — ...a la introducción del concepto de los beneficios impositivos, tanto para los partidos políticos cuanto para los donantes o aportantes privados, a los patrimonios de los partidos políticos; la creación de este concepto nuevo del Fondo Partidario Permanente con un mecanismo complejo pero con un alto grado de racionalidad, primero para la alimentación del fondo y luego para la distribución de su caudal, tanto sea por los manejos específicos que tendrá el Ministerio del Interior—que es la institución estatal que va a ser responsable del manejo de este fondo—, cuanto la distribución entre partidos nacionales y distritos, cuanto primeras y segundas vueltas, etcétera. La imposición del informe anual que debe hacer el Ministerio del Interior respecto del manejo de los fondos; la específica imposición de que sea la ley de presupuesto la que tenga que contemplar anualmente los aportes ordinarios y los extraordinarios, en el caso de los años electorales.

También las previsiones específicas de qué debe concebirse como aporte o donación de sectores privados y sus límites. Aquí introduzco también una duda respecto a las definiciones genéricas acerca de quiénes pueden ser aportantes o no; en este caso, la definición se ha dado por exclusión. Entiendo la inteligencia del concepto pero me parece excesivo en relación a los distritos electorales. En ese sentido, entiendo que puede haber una absoluta racionalidad en que una determinada empresa dedicada a equis tarea no pueda aportar en el distrito en el que presta servicios, pero no parece demasiado racional que no lo pueda hacer en distritos absolutamente ajenos.

A su vez, se establecen los techos y los pisos, como lo apuntaba el senador Yoma. El concep-

to de un peso por elector es el concepto générico. Los 500 mil pesos por distrito es, obviamente, el piso, la base; lo dice expresamente el mensaje y el texto del artículo específico del dictamen.

Finalmente, se introduce un capítulo referido al control del uso de los fondos...

Sr. Del Piero. – Pido la palabra para una interrupción.

Sr. Presidente (Sapag). – Señor senador Carbonell, el senador Del Piero le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Carbonell. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Sapag). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Del Piero.

Sr. Del Piero. – Vuelvo a insistir con lo mismo; creo que estamos expresando mal el concepto si decimos que el piso es 500 mil, porque quiere decir que de ahí para arriba se gasta, cuando en realidad es para abajo. El tope es 500 mil pesos en los distritos chicos que no alcanzan ese número de electores. Digo esto en relación a las distinciones que ha hecho el senador Yoma entre la terraza, el subsuelo y demás.

Insisto, porque esto no debe quedar confuso: las provincias chicas, que no llegan a 500 mil electores, pueden gastar hasta 500 mil pesos; por lo tanto ése es el techo y no el piso.

Sr. Yoma. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Carbonell. – Cómo no, señor senador

Sr. Presidente (Sapag). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. – Señor presidente: es el piso con respecto de la cantidad de electores por distrito, no respecto del monto a gastar.

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Carbonell. – En definitiva, estamos hablando de propuestas de trabajo. Para que se eliminen las dudas, en la parte final del artículo 39 de este dictamen de comisión dice exactamente: “A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, se considerará que ningún distrito tiene menos de quinientos mil electores”. Eso y decir que 500 mil pesos es la base, es exactamente lo mismo.

De todos modos, estamos enunciando una síntesis de los aspectos que se han trabajado hasta ahora y del nivel del consenso alcanzado, sobre el cual, personalmente, estoy señalando

algunas críticas y dudas. Lo he hecho en relación al tema de las internas abiertas, lo hice con respecto al texto de las limitaciones para las donaciones privadas a las campañas políticas y lo voy a hacer ahora con relación al control del gasto. Esto es una propuesta de trabajo en donde el senador Del Piero tiene todas las chances de proponer otro monto u otro concepto.

Con respecto a la cuestión del control del gasto de los partidos políticos, este papel de trabajo –digo papel porque no lleva firmas– introduce la idea de que debe ser efectuado por la Auditoría General de la Nación. Creo que se plantea nuevamente aquí un conflicto constitucional.

La Constitución Nacional establece específicamente que el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada estará a cargo de la Auditoría General de la Nación. Esto lo prevé el artículo 85 de nuestra Ley Fundamental, que le otorga a este organismo un ámbito específico de funciones sobre la administración pública centralizada y descentralizada.

Los partidos políticos no forman parte de la administración pública, ni nacional ni provincial. Los partidos políticos son entidades de derecho público, pero no forman parte de la administración pública. A mi criterio, esto señala una clara limitación para la Auditoría General de la Nación en el control interno de los partidos políticos. En todo caso, podría existir algún tipo de auspicio para que la Auditoría se haga cargo de tal control.

No creo francamente que sea una solución feliz, ni que sea la única alternativa posible; por cuanto hoy, conforme a la ley vigente, los jueces electorales nacionales y distritales tienen un cuerpo contable previsto ad hoc para el control del gasto de los partidos políticos.

Finalmente, el cuarto proyecto de ley alude a la creación de una nueva fiscalía específica en el ámbito de la Cámara Electoral Nacional, con un despliegue de funciones y de estructuras que, francamente, según mi criterio no resulta necesaria.

Existen suficientes organismos institucionales con capacidad de jurisdicción, que pueden tener abocamiento ad hoc en cada acto electoral que, normalmente, a nivel nacional se va a producir cada dos años. De ningún modo, esto justifica un nuevo dispendio institucional...

Sr. Presidente (Sapag). – Pido que se preste atención al señor senador que está haciendo uso de la palabra.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Carbonell.

Sr. Carbonell. – Francamente, creo que en el ámbito del Poder Judicial –específicamente dentro del Ministerio Público– existen numerosas estructuras que bien podrían tener abocamiento ad hoc cuando ocurra un hecho electoral. Me parece que no sería conveniente introducir un nuevo instituto, con su gasto y con su presupuesto. Además, creo que ello sería contradictorio con el hecho de que en la actualidad he computado –no estoy diciendo que ésta sea la cifra exacta– trece juzgados federales, con todas sus estructuras –fiscalías, defensorías, etcétera–, que han sido aprobados y que no se pueden poner en funcionamiento por falta de presupuesto. Seguramente, en estos casos existe una permanente y mayor necesidad para su creación que en el de una fiscalía que trabajaría más o menos uno o dos meses cada dos años.

Por estas razones, adelanto mi voto negativo a ese proyecto específico y le pido al cuerpo que reflexione sobre la necesidad de seguir incorporando gastos cuando en la Argentina nos enfrentamos por estos días al hecho maldito de un brutal déficit fiscal al que contribuye la evasión fiscal, por el lado de los ingresos, y el gasto institucional, por el lado de los egresos.

¿Cuántos proyectos existen actualmente en este cuerpo sobre creación de nuevos juzgados federales en todo el país? Naturalmente, esos juzgados federales son mucho más necesarios que una nueva fiscalía en el ámbito de la Cámara Electoral Nacional que, repito, en el mejor de los casos, cumpliría funciones durante uno o dos meses cada dos años.

Esto me lleva a una reflexión final sobre un tema que ha campeado en el discurso de mis colegas durante esta noche: ¿por qué la política se ha ido desprestigiando en la Argentina? No me gusta que siempre nos enojemos con los medios, con los demás o con los oportunistas de la política, como decía recién el señor senador Villarroel, y no nos hagamos cargo de los errores de la política en sí misma. Eso nos puede llevar a adoptar una actitud necia que no nos permita generar las respuestas y los remedios adecuados para preservar a esta actividad que, en el mundo de la democracia, es el único medio para reclutar a los directores, a los asambleístas y a los gerentes del Estado. Si la seguimos desprestigiando, la política va a quedar reservada para los marginales, para los insolven-

tes, para los perdedores o para los irresponsables. Y nos irá muy mal como país si tenemos un Estado en manos de esa clase de gente.

Entonces, creo que desde la política tienen que empezar a generarse los remedios para aquellos excesos que ella misma generó. En ese sentido, hasta ahora he escuchado hablar solamente de lo que gastan instituciones vinculadas al parlamentarismo; o sea, lo que gastan los parlamentos provinciales, los concejos deliberantes o el Parlamento nacional. Sin duda, es mucho lo que se gasta y debemos corregirlo, pero en ningún caso he escuchado hablar sobre lo que gastan las innumerables instituciones que la propia política ha ido creando en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional y, a veces, alguna con dependencia parlamentaria. Es difícil escuchar hablar de lo que gastan en el presupuesto nacional, por ejemplo, los órganos de control de los servicios públicos privatizados, los famosos organismos reguladores de los servicios públicos privatizados, algunos con cifras escandalosas, como el ORSNA.

El ORSNA es el organismo que debe controlar el funcionamiento de los aeropuertos privatizados. Leía que su gasto es de aproximadamente 113 millones de pesos por año. Lo mismo podemos decir respecto de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que tiene un gasto similar.

Me prometo a mí mismo y a ustedes traer para la próxima sesión el costo de los organismos públicos descentralizados que, en un número superior a cincuenta, tienen su sede en la Capital Federal pese a que controlan actividades como la pesca o la vitivinicultura.

Señor presidente: sobre esto no se habla y es bueno que todos sepamos cuánto influye el gasto de estos organismos en el déficit público nacional. Estos son productos de los políticos porque se crearon en el parlamento. Pero hoy nos tenemos que hacer cargo de algunos excesos y errores; entre otros, de lo que le cuesta al país el Consejo de la Magistratura y el Juri de Enjuiciamiento comparado con los resultados obtenidos hasta ahora.

Seguramente, en la próxima sesión vamos a considerar el proyecto de ley de subrogancias que, en sí mismo, es la crítica lapidaria al funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

De esto hay que hablar y también hay que corregirlo, porque el déficit estructural de la función pública deviene de que hemos gastado tan-

to en macanas que hoy, desde el Estado, no podemos gastar en lo que realmente hace falta.

Sr. Presidente (Sapag). — Tiene la palabra el señor senador Maglietti, último orador anotado.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: no pensaba hacer uso de la palabra, pero voy a expresar algunas opiniones muy breves porque todos queremos encontrar la solución a los graves problemas que hoy atraviesa la Nación.

Nadie puede negar que estamos viviendo una crisis no sólo social y económica sino también política, donde hasta la identidad de los partidos políticos ha entrado en una etapa gris y donde todo se mezcla y deja de ser lo que era: el radicalismo y el justicialismo sin sus doctrinas y principios y los dirigentes sin orientación y sin lucha.

Por ejemplo, recuerdo que en 1963 los radicales prometimos la anulación de los contratos petroleros y el presidente Illia cumplió estrictamente con lo dicho en la campaña política. Recuerdo cuando defendíamos el petróleo y a YPF; se trataba de principios básicos indiscutibles porque todos estábamos convencidos de que había que luchar por esas banderas y porque había que cumplir con lo sostenido en la campaña electoral.

Todo eso, que viene de una larga historia tanto para los radicales como para los justicialistas, que luchaban por los obreros, por la Nación y por la existencia de las empresas del Estado, pasó a ser una utopía porque no existen más esas condiciones ni esos principios. Ya no luchamos con el mismo énfasis para defender los intereses del Estado. Se han entregado todas las empresas del Estado a la voracidad del capitalismo privado y ya nadie las defiende.

El Estado ha sido vaciado y hemos creado miseria, pobreza y desocupación en aras de un "eficientismo" que, en la práctica, solamente ha servido para engordar las bolsas del capitalismo privado salvaje que hoy está explotando al pueblo argentino.

Hemos derribado todas las banderas y todas las defensas que tenía el gobierno mediante la subsistencia de sus empresas, que le permitían tomar decisiones de manera independiente.

Señor presidente: hoy los gobiernos no tienen independencia de decisión. Son las fórmulas del sector financiero y del capitalismo internacional las que fijan nuestras reglas de conducta.

Ya no podemos defender los intereses del pueblo ni del Estado. Se nos envían proyectos para defender los intereses del sector financiero y del capitalismo, porque de lo contrario aumenta el riesgo país. De negarnos a aprobarlos, seríamos los responsables de llevar a este gobierno a una crisis.

Entonces, nos mandan proyectos como aquel que pretende otorgar a los acreedores externos privilegios sobre los recursos destinados al pago de las jubilaciones y de los sueldos de los empleados públicos. Lo único que se quiere asegurar es que los capitales que vienen aquí a invertir, cobren sus intereses. Pero no vienen a invertir, sino a desangrarnos.

Se quiere establecer una renegociación de una parte de la deuda, de aproximadamente 20 mil millones de pesos; al quince por ciento anual, lo cual es un disparate total y absoluto.

Sr. Presidente (Sapag). — Señor senador, le pido que se circunscriba al tema.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: voy a entrar en el tema diciendo lo siguiente. Este proyecto, casualmente, tiene por objeto mejorar la situación de los partidos políticos y, en consecuencia, luchar contra la crisis política que estamos padeciendo.

Vamos a poder luchar contra esa crisis si somos capaces de entender cuál es la situación y la realidad política del país.

Comparto muchos de los principios de esta norma, y considero que son positivos. Pero evidentemente, no ataca la raíz del mal.

En primer lugar, mientras existan aportes privados no vamos a evitar la influencia de los grandes sectores que hoy manejan al país. Por lo tanto, lo primero que hay que eliminar es el aporte privado, para que las grandes empresas que están manejando a nuestro país no puedan interferir en la vida política e imponer a los candidatos.

En segundo término, hay que establecer un sistema democrático. En la actualidad, no existe democracia en las campañas políticas, porque los partidos que tienen el apoyo de los sectores financieros, disponen de los fondos necesarios para acaparar los medios de difusión, mientras que aquellas agrupaciones que no disponen de esos recursos se encuentran en peores condiciones.

Por lo tanto, no se puede hablar de igualdad ante la ley ni ante el pueblo, porque el candidato de los grandes intereses tiene una gran difu-

sión. Y aquel candidato que ataca a los grandes grupos económicos, y pretende defender los intereses del pueblo y del país, no tiene el apoyo de estos importantes sectores de poder.

Si queremos hablar de igualdad tenemos que terminar con los aportes privados en esta Argentina, que hoy está gobernada por los intereses financieros.

En la actualidad, es el sector financiero el que está gobernando al país, nos guste o no. En otros países gobierna el sector productivo, pero aquí —desde 1976 con Martínez de Hoz, y luego a partir de 1991—, es el sector financiero el que maneja al país.

Si vamos a dictar una legislación en esta materia, es necesario que tratemos de ponerle freno a ese sector. Y no lo vamos a lograr con una ley que toque suavemente —por encima— la situación. Entonces debemos tomar medidas, y éstas tienen que ser de raíz, como las que yo propugno.

La financiación tiene que venir únicamente del Estado. Las campañas tienen que ser sumamente austeras. Se debe permitir realizar una campaña a todos los partidos, con medios limitados a la financiación del Estado, la cual también tiene que ser austera.

Además, considero que son ridículas las afirmaciones que sostienen que se deben eliminar las Cámaras de Senadores de las provincias, o reducir a la mitad el número de legisladores.

Bajo ningún punto de vista esas afirmaciones tienen lógica. ¿Por qué? Porque el problema del país no es la cantidad de legisladores o de concejales, ni se vincula con el sueldo que ellos ganan.

Voy a dar un ejemplo. En mi provincia hay treinta diputados. Si tuvieran un sueldo o un ingreso mensual de 6 mil pesos, por todo concepto, se gastarían 180 mil pesos por mes. Si a esos legisladores les sumáramos ciento cincuenta empleados, con un sueldo de 2 mil pesos mensuales cada uno, se gastarían en total otros 3.600.000 pesos al año. Es decir que la Legislatura de Formosa no tendría que gastar más de 5.760.000 pesos al año en sueldos; más 1.000.000 de pesos de gastos generales, es decir, un total de 6.700.000 pesos. Sin embargo, se gastan 55 millones de pesos.

Es decir que el problema no es el sueldo de los legisladores sino la existencia de gastos injustificados, de despilfarros y de corrupción, todo

lo cual reina no sólo en los órganos legislativos sino en toda la administración pública nacional y provincial, como bien ha señalado el señor senador que me precedió en el uso de la palabra.

Por ello, sostengo que no se encaran las cosas con claridad. No se trata de reducir el número de legisladores sino de apuntar a todo aquello que se hace sin seriedad y responsabilidad.

También me quiero referir a otra cuestión importante, como son las elecciones internas, las cuales se han solicitado aquí para todas las autoridades partidarias. Al respecto no sostengo que dichas elecciones son necesarias o innecesarias, porque cada partido político tiene el derecho de imponer su sistema —por eso cada agrupación tiene su personería—, pero considero que es necesario que la vida de los partidos políticos, sobre todo en materia de elecciones internas, debe estar perfectamente reglamentada, para que todo se encuadre por medio de la Justicia Electoral y para que los procedimientos se lleven a cabo también ante dicha Justicia.

De esa manera, vamos a terminar con todas las prácticas viciosas que hoy existen —aunque no siempre— en muchos partidos políticos, ya que las juntas electorales partidarias no suelen cumplir claramente con sus objetivos, a la vez que existen fraudes, problemas y acusaciones de toda índole en todas las agrupaciones. Es un tema de corrupción que debemos eliminar.

Señor presidente: en virtud de que todos estamos apurados por pasar a la votación y por respeto a mis colegas, voy a finalizar mi exposición.

Quiero manifestar que esta iniciativa mejorará en algo la situación actual, pero desgraciadamente no solucionará los gravísimos problemas que hoy sufre el país. Para ello necesitaríamos un proyecto que verdaderamente ataque los problemas de raíz; sólo de esa manera logremos una real reforma política.

Sr. Presidente (Sapag). — Se está llamando para formar quórum. En la casa hay treinta y siete señores senadores. Esta situación me hace recordar algunas palabras pronunciadas por el señor senador Cafiero, quien dijera que no nos mata nadie, sino que nos suicidamos.

—Se continúa llamando para votar.

Sr. Presidente (Sapag). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Corach. – Señor presidente: solicito que se llame para votar por el plazo que usted estime pertinente y que, vencido éste, se pase lista para que se sepa quiénes son los senadores que han negado el quórum para la sanción del proyecto de ley sobre reforma política.

Sr. Presidente (Sapag). – Vamos a llamar para votar durante quince minutos...

–Varios señores senadores hablan a la vez

Sr. Villaverde. – Que se pase lista ahora..

Sr. Presidente (Sapag). – Tiene la palabra el señor senador Romero Feris.

Sr. Romero Feris. – Señor presidente: pido que se llame durante diez minutos.

Sr. Presidente (Sapag). – Se llamará por diez minutos y, si no se lograra quórum, se pasará lista.

–Se continúa llamando.

–Luego de unos minutos:

Sr. Presidente (Sapag). – Por Secretaría se va a pasar lista.

–Se encuentran presentes los señores senadores Jorge Alfredo Agúndez, Augusto Alasino, Juan Carlos Altuna, Eduardo César Angeloz, Antonio F. Cafiero, José F. Carbonell, Carlos Vladimiro Corach, Pedro Del Piero, Carlos D. Funes, Raúl Alfredo Galván, José M. García Arecha, José L. Gioja, Alcides H. López, Alberto Ramón Maglietti, Nélida Susana Martínez Pelácz, Jorge F. Mikkelsen Löth, Luis Arturo R. Molinari Romero, Leopoldo Raúl Guido Moreau, Liliana Teresita Negre De Alonso, Gerardo L. Palacios, Ruggero Preto, Beatriz Irma Raijter, José A. Romero Feris, Néstor Daniel Rostan, Hugo Abel Sager, Humberto Elías Salum, Julio Argentino San Millán, Felipe R. Sapag, Héctor Omar Torino, Daniel A. Varizat, Pedro G. Villarreal, Jorge Antonio Villaverde, Jorge Raúl Yoma, Horacio Aníbal Zalazar.

Sr. Villaverde. – ¿Cuántos señores senadores hay?

Sr. Presidente (Sapag). – Treinta y cuatro.

Sr. Villaverde. – No; pregunto cuántos senadores hay en la casa.

Sr. Presidente (Sapag). – Treinta y siete.

Tiene la palabra el señor senador Romero Feris.

Sr. Romero Feris. – Le quiero preguntar a los presidentes de los bloques mayoritarios

–justicialista y radical– si es posible lograr quórum, a fin de esperar un poco más, ya que es una barbaridad que para votar esta iniciativa no tengamos el número necesario.

Sr. Presidente (Sapag). – ¿Cuánto esperamos?

Sr. Gioja. – Esperemos diez minutos, señor presidente.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Corach. – ¿Cuántos senadores hay en la casa, que no están en el recinto?

Sr. Presidente (Sapag). – No los podemos identificar.

Sr. Gioja. – Señor presidente: esperemos cinco minutos más, porque hay varios señores senadores que se encuentran en la casa.

Sr. Presidente (Sapag). – Bueno; espere-mos diez minutos más.

Sr. Cafiero. – ¡Esto es una falta de respeto hacia todos los senadores que estamos acá!

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Sapag). – En la casa hay 37 señores senadores.

Señores senadores: creo que este proyecto merece el esfuerzo de esperar cinco o diez minutos más.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Sapag). – Esperemos cinco minutos más.

–Luego de instantes:

Sr. García Arecha. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Sapag). – Tiene la palabra el señor senador García Arecha.

Sr. García Arecha. – Señor presidente: anteriormente usted informó que hay 37 señores senadores en la casa. Entiendo que la Presidencia puede requerir la información sobre quiénes son los legisladores que, estando en el Palacio, no concurren al recinto a efectos de dar quórum para votar este proyecto de ley.

En la realidad de la vida política argentina muchas veces se socializan los costos. Y yo no tengo el menor interés de ser copartícipe del costo de no tratar determinados temas por la irresponsabilidad de otros.

Por lo tanto, solicito que la Presidencia requiera esa información y la haga pública. Que

cada cual se haga responsable de las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones. Digo esto, porque muchas veces se da la casualidad de que escuchamos en este recinto largos discursos, difundidos por los medios de comunicación, pero al momento de ejercer la responsabilidad de votar hay quienes no están en el lugar que corresponde.

Sr. Presidente (Sapag). – Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. – Señor presidente: creo que el tiempo previsto está por cumplirse. No es la primera vez que se producen este tipo de situaciones en el Senado. Entonces, propongo que este asunto sea el primer punto del temario de la próxima sesión y que se cierre de la lista de oradores, que creo que está agotada.

No quiero hablar de fracaso de la sesión ni mucho menos. Considero que ha sido un debate trascendente, en el que se han dicho cosas importantes.

En consecuencia, entiendo que lo más conveniente es que al comenzar la sesión de la próxima semana se pongan en consideración estos temas que, lamentablemente, esta noche no podremos votar.

Sr. Presidente (Sapag). – Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. – Señor presidente: todo legislador tiene derecho a asistir a la sesión o no, con-

forme su acuerdo o desacuerdo con el tema en consideración.

Lo único que le voy a solicitar a los señores presidentes de bancada es que en caso de que esté previsto el tratamiento de este asunto en la próxima sesión, primero se verifique en cada bloque si realmente existe voluntad política para su consideración, a fin de evitar exponer al Senado a otro papelón como el de esta noche.

Sr. Presidente (Sapag). – Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – Señor presidente: no creo que esto haya sido un papelón. Nosotros estuvimos presentes en este recinto durante seis o siete horas; por lo tanto, disiento de lo manifestado por el señor senador Yoma.

Además, hemos estado sesionando con cuarenta legisladores. Entonces, quiero aclarar que de ninguna manera el trabajo de quienes estuvimos presentes toda la tarde puede ser interpretado como un fracaso.

Sr. Presidente (Sapag). – En consecuencia, este asunto pasa como primer punto del temario de la próxima sesión, sin oradores, a efectos de llevar directamente a cabo la votación en general.

Queda levantada la sesión.

–Son las 22 y 23.

RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.